



ALCALDÍA DE  
SANTIAGO DE CALI  
DIRECCIÓN JURÍDICA

## RELATORÍA JURÍDICA ABRIL 2012

30 - 04 - 2012

### **Procuraduría destaca resultados de la conciliación administrativa**

"Nuestro empeño es hacer de la conciliación extrajudicial el mecanismo por excelencia de resolución de conflictos en sede contenciosa, con el objetivo de que se logren conciliar tres de cada diez de los asuntos que llegan al conocimiento de los agentes del Ministerio Público", dijo la procuradora general (e), Martha Isabel Castañeda Curvelo, durante el acto de instalación del V Encuentro de procuradores judiciales para asuntos administrativos, quienes se reúnen en Bogotá en las instalaciones del Club de la Fuerza Aérea Colombiana. Procuraduría-Comunicado-2012-N0000386 2012/04/23

---

### **Acto de insubsistencia no se expidió por razones del buen servicio sino que obedeció a la arbitrariedad del nominador**

La prueba documental lleva a la Corporación a "la convicción incontrovertible de que, el actor, garantizaba la prestación de un adecuado servicio público, pues no sólo atendía sus responsabilidades con rectitud y eficiencia, que son las condiciones esperadas de todo funcionario público, sino que el caudal probatorio pone en evidencia el excelente servicio que prestaba, y que lo hizo merecedor de constantes felicitaciones, distinciones y menciones, las cuales fueron una constante en su desempeño laboral, es decir, se dieron a través de todo el tiempo que prestó sus servicios, incluso hasta días antes de la insubsistencia de

su nombramiento, las personas a quienes colaboraba en las investigaciones, se mostraban agradecidas con su gestión”.

A juicio de la Sala “se logró desvirtuar la presunción de legalidad del acto de remoción acusado, pues obran abundantes pruebas que demuestran el excelente servicio público que desempeñaba el actor, y la entidad demandada, no se preocupó por aportar, ni siquiera sugerir una prueba indiciaria, con la cual demostrara en qué sentido se proponía mejorar el servicio con la expedición del acto de insubsistencia del actor.

En resumen, se pone de manifiesto que la causa determinante para la expedición del acto acusado, no fueron razones del buen servicio público, sino que obedeció al simple capricho o arbitrariedad del nominador, configurándose la desviación de poder, una de las causales de anulación de los actos administrativos”. Consejo de Estado CE-SEC2-EXP2011-N10685-01 (00873-09) Sentencia 2011/12/07

---

### **Prórrogas o adiciones a concesión de obras sólo se pueden realizar si tienen relación con la obra contratada**

La Corporación declaró exequible el primer inciso del artículo 28 de la Ley 1150 de 2007, en el entendido que “la expresión “obras adicionales directamente relacionadas con el objeto concesionado”, solamente autoriza la prórroga o adición de obras o actividades excepcional y necesariamente requeridas para cumplir el objeto del contrato inicial”. La Sala resaltó que “la posibilidad de prórroga o de modificación no puede ser ilimitada, sino que, en virtud de los principios de planeación y seguridad jurídica, debe ser excepcional y emplearse solamente cuando sea necesario para dar cabal cumplimiento al objeto del contrato inicial”.

Con fundamento en esta consideración, se concluyó que “era necesario excluir del ordenamiento constitucional una de las interpretaciones posibles del precepto acusado, en particular, de la expresión “obras directamente relacionadas con el objeto concesionado”. En efecto, la Sala estableció que “esta frase podía interpretarse de dos maneras: de una forma amplia según la cual, la expresión referida habilita al concesionario, durante el desarrollo de la concesión, a ejecutar obras relacionadas con el objeto concesionado, pero que no se previeron en el objeto inicial y que en realidad constituyen nuevos objetos

contractuales; y de una forma restringida, conforme a la cual, en concordancia con el artículo 32.4 de la ley 80 de 1993, la expresión hace referencia a la posibilidad de adiciones o prórrogas de actividades excepcional y necesariamente requeridas para cumplir el objeto del contrato inicial". El Alto Tribunal al acoger la segunda tesis dijo que ello permite "solventar problemas que surjan durante la ejecución del contrato en beneficio de la continuidad de la prestación de los servicios públicos asociados a la obra concesionada, pero sin otorgar un privilegio injustificado al contratista". Corte Constitucional-Comunicado de Prensa de Sala Plena-2012-N

---

28 - 04 -2012

**Perjuicio moral no puede valorarse mediante principio de proporcionalidad** 28 de Marzo 3:51 PM

Desde agosto pasado, la Sección Tercera del Consejo de Estado incorporó en su jurisprudencia el test de proporcionalidad para tasar los perjuicios morales. Sin embargo, la Subsección C refutó este criterio, en sentencia del pasado 13 de marzo.

Según la corporación, el principio de proporcionalidad no es un instrumento jurídico apropiado para valorar el daño moral, en cuya liquidación no hay un conflicto de derechos fundamentales, principios o valores.

Esa clase de daño lesiona la órbita íntima del ser humano, que es inconmensurable. Con su valoración, aclaró, no se pretende definir los deberes jurídicos impuestos al legislador en el estudio de constitucionalidad de una ley.

Además, un daño subjetivo no puede tasarse con base criterios objetivos. De hecho, el principio de proporcionalidad no logra introducir esa objetividad.

'Arbitrio juris'

Para la Subsección, aplicar el principio de proporcionalidad en la valoración del perjuicio moral vulneraría el derecho a la igualdad. Por lo tanto, en esos casos, debe acudirse al arbitrio juris y a la equidad.

El primer criterio es válido, porque el juez tiene un margen de discrecionalidad, fundamentado en las reglas de la experiencia y la sana crítica.

Sin embargo, como esa libertad no puede confundirse con arbitrariedad, la indemnización por el daño moral debe determinarse con base en los hechos y las pruebas allegadas al proceso, concluyó el alto tribunal.

(Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, Sentencia 0500123250001994207901 (21859), M. P. Enrique Gil Botero, mar.13/12)

---

26- 04 - 2012

### **Listo incremento salarial del 2012 para empleados públicos (12:20 p.m.)**

(Departamento Administrativo de la Función Pública, Decreto 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854 y 855, 4/25/2012)

A través de 30 decretos, el Gobierno acaba de oficializar el aumento del 5,0 % a la asignación básica de los más de 900.000 empleados estatales, con retroactivo al 1º de enero pasado. Las normas cobijan a funcionarios de la Rama Ejecutiva, corporaciones autónomas regionales (CAR), empresas estatales, organismos de control, Congreso de la República, Fiscalía General de la Nación, Rama Judicial, Justicia Penal Militar, entidades territoriales, universidades públicas, FF MM y Policía Nacional. El Gobierno también estableció el reajuste de la bonificación de actividad judicial para jueces y fiscales y las nuevas escalas de viáticos para empleados públicos.

---

### **Las autoridades deben promover y realizar adecuaciones en su planta de personal que les permita obtener los objetivos**

Ni el Estado ni sus instituciones están obligadas a mantener de forma permanente plantas de personal inflexibles, inamovibles que les impida

adecuarlas a las necesidades funcionales de la administración, pero y esencialmente, a las exigencias de una actividad ágil, eficaz y diligente en la prestación de los servicios y en el ejercicio de sus competencias; por ello y desde luego, dentro del marco legal, las autoridades deben promover y realizar adecuaciones en su planta de personal que les permita obtener los objetivos de la función propia de los cargos como elemento sustancial del compromiso estatal de la administración pública.

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN SEGUNDA  
Consejero Ponente: Dr. Víctor Hernando Alvarado Ardila Actor: Jorge Eliécer Carrero Ojeda Bogotá D.C., Noviembre 03 de 2011 Radicación: No. 250002324000200800501 01 No. Interno: 0335 - 2011

---

### **Mientras no se demuestre lo contrario los actos administrativos se presumen legales**

Si de acuerdo con el principio de legalidad la actividad de la Administración debe someterse plenamente a las normas de superior jerarquía, se infiere que, mientras no se demuestre lo contrario, una vez se tornen ejecutorias los actos que la comprenden, toda ella se ha realizado de conformidad con el ordenamiento y por ende queda cobijada con una presunción de legalidad.

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN TERCERA  
Consejero Ponente: Jaime Orlando Santofimio Gamboa Actor: Empresa Asociativa de Trabajo, contra el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural Bogotá D.C, Marzo 28 de 2012 Radicación: 73001-23-31-000-2000-00200-01 (20.393)

---

### **En democracia, las acciones populares son una herramienta poderosa para enfrentar a poderes públicos y privados**

Para la Corte, el dejar de recibir, el dejar de ganar, no constituyen cargas al ejercicio de un derecho

Los demandantes afirman que la derogatoria de los incentivos económicos en las acciones populares es una decisión que vulnera varios artículos de la Constitución, ya que viola el derecho a la administración de justicia, desmotiva la presentación de acciones

populares, fomenta la corrupción administrativa, crea una injusta desigualdad porque en el código civil aún se mantienen los estímulos a las acciones populares, dificulta la defensa y difusión de los derechos e intereses colectivos y vulnera los principios de unidad de materia y progresividad.

La Sala encuentra que los principales reproches que se plantean en las diferentes demandas se soportan en los mismos cargos que fueron analizados y desvirtuados por la Corte en pronunciamiento anterior. Así mismo establece, que frente a otras acusaciones insinuadas en las demandas no se satisfacen las exigencias de certeza, especificidad, suficiencia y pertinencia necesarias, para abordar un examen de fondo, por la indebida formulación de los cargos. Decide estarse a lo resuelto en la sentencia C-630 de 2011, mediante la cual se declaró exequible la Ley 1425 de 2010. Corte Constitucional-Sentencia-2011-N

---

### **Inexequible aparte de ley de empleo que trasladaba funciones a las alcaldías en relación con asociaciones de pensionados**

Por desconocer el principio de unidad de materia, la Corporación declaró inexequible el artículo 23 de la Ley 1429 de 2010, “por la cual se expide la Ley de Formalización y Generación de Empleo”. La disposición acusada modificó parcialmente el artículo 3 y 4 de la Ley 43 de 1984.

Explicó la Sala que “en virtud de los artículos 3 y 4 de la citada ley, dichas entidades de pensionados con personería jurídica quedaban sujetas a la inspección y vigilancia del Ministerio de Trabajo, que era la entidad competente para reconocer tal personería jurídica, aprobar sus estatutos, las reformas a los mismos y para revisar y cancelar la personería cuando a ello hubiere lugar.

Advirtió, que expedida la Ley 1429 de 2010, dicha competencia no radica ya en el Ministerio del Trabajo, sino en las Alcaldías del domicilio principal de la asociación, sin que se observe que tal medida tenga relación alguna con la generación de empleo y la flexibilización empresarial, pilares básicos de la Ley 1429”.

El Alto Tribunal señaló que “la lectura sistemática de las disposiciones de la Ley 1429 de 2010 permite concluir, que tienen como objetivo

propender a la consecución de medidas encaminadas a la generación de empleo y no a la descongestión administrativa de una entidad de la administración central”.

CorteConstitucional-C-2012-N0292 (D-8615) Comunicado de Prensa de Sala Plena 2012/04/18

---

**Condición de beneficiario de convención colectiva, no se presume, es necesario de acuerdo con la ley demostrar esa calidad**

Solicitó la reclamante a Empresas Municipales de Cali S.A. E.S.P. Emcali S.A. E.S.P. el reconocimiento y pago indexado de las prestaciones sociales legales y convencionales, correspondientes entre los años 1999 y 2003, establecidos en la Convención Colectiva de Trabajo vigente para los años 1999-2000, -la cual se ha prorrogado automáticamente- celebrada entre Emcali Eice ESP y Sintraemcali.

El Tribunal Superior de Cali confirmó el fallo del juzgado que absolvió a la demandada de todas las pretensiones. Encuentra esta Sala que habiendo alegado la demandante ser beneficiaria de las convenciones colectivas entre la demandada y Sintraemcali, por extensión, dada su calidad de trabajadora oficial, no acreditó su calidad de beneficiario indirecto (sic), cuestión que llanamente se traduce en haber demostrado el pago de las cuotas sindicales ordinarias durante la vigencia de las convenciones colectivas pluricitadas, pero respecto de SINTRAEMCALI y no SERVIEMCALI, como en efecto demostró.” La Sala no casó la sentencia. Corte Suprema de Justicia- Sentencia-2012-N

---

**Llamado del Presidente Santos a empresas de servicios públicos para que presenten planes de contingencia**

Al indicar que 465 empresas de servicios públicos del país no han presentado todavía planes de contingencia, el Mandatario recordó que tienen plazo hasta el próximo 30 de abril para que cumplan con este acto de responsabilidad frente a los ciudadanos. Presidencia- Comunicado-2012-N0004966(2) 2012/04/25

---

## **A través de acuerdo Concejo de Cali transformó a Emcali en empresa industrial y comercial**

“Por medio del Acuerdo No. 50 de 1961, modificado por los Acuerdos Nos. 82 de 1987 y 21 de 1992, se creó el establecimiento público de propiedad del Municipio de Cali, denominado Empresas Municipales de Cali “Emcali”. Dicha empresa se rige por lo establecido en los artículos 365 a 370 de la Constitución Política y la Ley 142 de 1994”. SuperServicios-Concepto-2012-N0000039 2012/01/26

---

## **Recertificada en calidad Sala Administrativa y ocho seccionales de la Judicatura**

El Icontec recertificó a la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura porque ha formulado una política de gestión y control de calidad, con fundamento en el respeto y cumplimiento de las normas NTC ISO 9001:2008, Ntcgp 1000:2004 y el Modelo Estándar de Control Interno Meci 1000:2005.

Con base en el Sistema de Gestión, la Sala Administrativa unifica los criterios y parámetros básicos en materia de procesos, procedimientos, indicadores y formatos, procurando construir la mejor forma de armonizar los conceptos de calidad, permitiendo una mayor claridad sobre la forma de desarrollar la función administrativa del Estado. Consejo Superior de la Judicatura--2012-N

---

## **Instrucciones sobre el IBL para las contribuciones parafiscales sena, ICBF, y cajas de compensación familiar**

El Ministerio del Trabajo en consideración a las diversas inquietudes e interpretaciones frente al ingreso Base de Liquidación de las contribuciones parafiscales SENA, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, en el marco de la normatividad vigente sobre la materia, y sin perjuicio de interpretaciones anteriores, imparte una serie de instrucciones sobre el IBL para las contribuciones parafiscales SENA,



**Se adiciona la circular básica jurídica en relación con nuevas modalidades de pensión**

Se autoriza de manera general las siguientes modalidades de pensión: Renta Temporal Cierta con Renta Vitalicia de Diferimiento Cierto; Renta Temporal con Renta Vitalicia Diferida; Retiro Programado sin negociación de Bono Pensional; Renta Temporal con Renta Vitalicia Inmediata. SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA Abril 24 de 2012 Circular Externa No. 013

---

25 -04 -2012

**La estabilidad reforzada en el empleo procede en todas las modalidades de contratos laborales**

La garantía de la estabilidad reforzada en el empleo abarca todas las modalidades de contratos, incluidos los que suscriben las empresas de servicios temporales, los cuales tienen, en principio, una vigencia condicionada al cumplimiento pactado o a la finalización de la obra.

Ello, en razón de que el principio de estabilidad en el empleo se predica de todos los trabajadores, sin diferenciar la naturaleza del vínculo contractual "en tanto lo que se busca es asegurar al empleado la certeza mínima de que el vínculo laboral contraído no se romperá de manera abrupta y sorpresiva, de manera tal que este no quede expuesto, en forma permanente, a perder su trabajo y con el los ingresos que permiten su propio sustento y el de su familia, por la decisión arbitraria del empleador.

Magistrado Ponente: Gabriel Eduardo Mendoza Martelo Actora: Omaira Angulo y otros, contra la Cooperativa de Trabajo Asociado Solidaridad Empresarial Bogotá D.C., Octubre 20 de 2011 Sentencia T-774

---

**Es prohibido iniciar procesos ejecutivos y decretar medidas cautelares contra entidades territoriales que estén ejecutando acuerdos de reestructuración de pasivos**

De conformidad con lo prescrito en el numeral 13 del artículo 58 de la ley 550 de 1999, existe prohibición legal para iniciar procesos ejecutivos y decretar medidas cautelares contra entidades territoriales que estén ejecutando Acuerdos de reestructuración de pasivos, haciendo extensiva esta prohibición tanto a las obligaciones causadas con anterioridad a la suscripción del Acuerdo que hayan sido incorporadas o no en el Acuerdo y a las obligaciones causadas con posterioridad, toda vez que el legislador no hizo distinción alguna frente a la causación de las mismas. MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO Marzo 29 de 2012 Concepto Jurídico No.010616

---

**La pérdida de la fuerza ejecutoria del acto administrativo no puede confundirse con las causales de nulidad del mismo**

No puede confundirse la ocurrencia de la pérdida de la fuerza ejecutoria del acto administrativo con las causales de nulidad del mismo.

Las causales de nulidad se encuentran previstas en el artículo 84 del C.C.A. y se dan desde la formación o expedición del acto, bien sea porque se aparta de las normas en que debía fundarse, o porque fue expedido por funcionario u organismo incompetente o en forma irregular, o con desconocimiento del derecho de defensa o mediante falsa motivación o desviación de poder; mientras que la pérdida de fuerza ejecutoria es un fenómeno jurídico distinto y ocurre por las causales previstas en el artículo 66 ibídem

Consejo de Estado SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Consejera Ponente: María Claudia Rojas Lasso Actor: Marco Emilio Hincapié Ramírez, contra la CORTOLIMA Bogotá, D. C., Marzo 16 de 2012 Ref.: Expediente 2003-00379-01

---

### **Los contratos de tracto sucesivo son objeto de liquidación de común acuerdo por las partes contratantes**

Conforme lo dispone el artículo 60 de la Ley 80 de 1993, los contratos de tracto sucesivo, es decir, aquellos cuya ejecución o cumplimiento se prolonga en el tiempo y los demás que así lo requieran, serán objeto de liquidación de común acuerdo por las partes contratantes.

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN TERCERA  
Consejera Ponente: Stella Canto Díaz del Castillo Actor: Edison Enrique Massa Narváez, contra el Municipio de Santa Cruz de Lorica Bogotá, D. C., Febrero 15 de 2012 Proceso No.: 230012331000199900306-01 (21697)

---

### **La inobservancia del principio de transparencia y el deber de selección objetiva genera la nulidad absoluta del contrato estatal**

La ley de contratación estatal dispone que en el proceso de selección del contratista debe tenerse en cuenta el principio de transparencia y el deber de selección objetiva, la elusión de estos mandatos comporta una transgresión al orden legal que conduce a la nulidad absoluta del contrato. Si lo primero, es decir no se observa el principio de transparencia, se genera una nulidad absoluta por objeto ilícito porque de acuerdo con el derecho común esto es lo que se configura en todo acto que contraviene al derecho público; si lo segundo, esto es se incumple el deber de selección objetiva, se produce una nulidad absoluta, por celebrarse el contrato con abuso o desviación de poder.

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN TERCERA  
Consejero Ponente: Jaime Orlando Santofimio Gamboa Actor: Pablo Emilio Martínez Enciso, contra el Municipio de Ibagué Bogotá D.C, Marzo 28 de 2012 Radicación: 73001-23-31-000-1999-00536-01 (22.471)

---

### **La potestad para contratar de las E.S.E. para operar mediante terceros solo es viable siempre que no se trate de funciones permanentes**

Si bien existe un fundamento constitucional parcial para el art. 59 de la Ley 1438 de 2011, siendo la contratación de servicios una figura válida

desde el punto de vista constitucional y legal, el precepto acusado, tal y como se encuentra redactado, al consagrar de manera amplia y general una autorización o facultad a las Empresas Sociales del Estado, sin ningún tipo de límites o restricciones, para que puedan contratar con terceros, la corte declarar exequible el artículo 59 de la Ley 1438 de 2011, en el entendido de que la potestad de contratación otorgada por este artículo a las Empresas Sociales del Estado para operar mediante terceros, solo podrá llevarse a cabo siempre y cuando no se trate de funciones permanentes o propias de la entidad, cuando estas funciones no puedan llevarse a cabo por parte del personal de planta de la Empresa Social del Estado o cuando se requieran conocimientos especializados. Corte Constitucional.

Magistrado Ponente: Luis Ernesto Vargas Silva Actor: Yesid Hernan Camacho Jimenez Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 59 de la Ley 1438 de 2011 por medio de la cual se reforma el Sistema de Seguridad Social en Salud Bogotá D.C., Marzo 07 de 2012 Sentencia C-171

---

### **El derecho al ambiente sano va íntimamente ligado a la vida y la salud de las personas**

El ambiente sano no sólo es considerado como un asunto de interés general, sino como un derecho de rango constitucional del que son titulares todos los seres vivos, incluidas las futuras generaciones, en conexidad con ese inexcusable deber del Estado de garantizar la vida de las personas en condiciones dignas, precaviendo cualquier injerencia nociva que atente contra su salud.

Es primordial reiterar que la defensa del entorno como valor constitucional tiene notable importancia, definida frente a la relación entre la vida y el ambiente natural, que demanda un inescindible equilibrio entre ambos para precaver que se causen perjuicios contra la salubridad individual y social. Así, el derecho al ambiente sano va íntimamente ligado a la vida y la salud de las personas, en la medida en que los factores perturbadores de los recursos naturales invariablemente repercuten contra el ser humano. Magistrado ponente: Nilson Pinilla Pinilla Actor: Hernando Gómez y otra, contra la Empresa de Acueducto y

## **EJERCICIO DE LA INGENIERIA Experiencia profesional**

La Corte Constitucional declaró exequible el artículo 12 de la Ley 842 de 2003, que trata de la experiencia profesional de los ingenieros o de algunas de sus profesiones afines o auxiliares, al considerar que el cómputo de la experiencia a partir de la fecha de expedición de la matrícula profesional, es una exigencia razonable que protege a la comunidad y a la sociedad de eventuales riesgos sociales.

El comunicado de prensa de la Corte Constitucional, es el siguiente: "EXPEDIENTE D-8790 – SENTENCIA C-296/12 M.P. Juan Carlos Henao Pérez

1. Norma acusada

LEY 842 DE 2003 (octubre 9)

Por la cual se modifica la reglamentación del ejercicio de la ingeniería, de sus profesiones afines y de sus profesiones auxiliares, se adopta el Código de Ética Profesional y se dictan otras disposiciones.

---

**24 – 02 – 2012**

## **Gobierno Nacional denunció que se encuentran en riesgo \$457 mil millones destinados al pago pensional de maestros**

Los ministerios de Hacienda y Educación, y la Agencia de Defensa Jurídica de la Nación revelaron la expedición de resoluciones presuntamente irregulares que decretan el embargo de recursos del Fondo de Prestaciones del Magisterio y ponen en riesgo el pago de las pensiones de más de 130.000 maestros de todo el país.

Presidencia-Comunicado-2012-N0004964 2012/04/23

---

**Alcance de la expresión "experiencia altamente calificada" como requisito para obtener la prima técnica: Consejo de Estado**

## Consejo de Estado- Concepto-2012-N

La Sala de Consulta del Consejo de Estado aclaró que “la expresión “altamente calificada” como criterio para acceder a la prima técnica no es equivalente a la “experiencia profesional”. La primera alude a condiciones profesionales de excelencia que por razones de estudios, conocimientos, talentos, destrezas y habilidades, exceden los requisitos establecidos para ocupar un empleo. La experiencia profesional, en cambio, es una de las condiciones que junto con el requisito de estudio, forma parte del perfil de competencias que ordinariamente se requieren para ocupar el empleo”. La publicación del concepto fue autorizada el 23 de abril de 2012.

La Sala también señaló que “la experiencia altamente calificada como criterio para acceder a la prima técnica puede haberse conseguido o completado en el ejercicio del cargo sobre el cual se está solicitando su reconocimiento o también en otros empleos públicos o privados. En todo caso debe tener la calidad de “calificada” a que se ha hecho referencia en la respuesta anterior”.

---

### **Recurso de reconsideración debe notificarse, para que sea eficaz**

En los asuntos tributarios, para que el recurso de reconsideración sea eficaz, la administración debe notificárselo al contribuyente.

De esta manera es posible interrumpir el término que beneficia al peticionario con la declaratoria del silencio administrativo positivo, explicó la Sección Cuarta del Consejo de Estado.

La corporación recordó que la acción de nulidad y restablecimiento del derecho no es el mecanismo idóneo para que se declare este silencio, pues se trata de un deber oficioso de las entidades públicas o de una exigencia que debe ser interpuesta por el ciudadano.

(Consejo de Estado, Sección Cuarta, Sentencia 17578, ene. 19/12, C. P. Hugo Fernando Bastidas)

---

## **Gobierno destaca fallo que respaldó reforma constitucional sobre sostenibilidad fiscal 23 de Abril 2:31 PM**

El presidente Juan Manuel Santos celebró el reciente fallo de la Corte Constitucional que declaró exequible el Acto Legislativo 03 del 2011, que estableció el principio de sostenibilidad fiscal. Santos explicó que todas las decisiones que tomen los poderes públicos deberán someterse a dicho principio, lo que les garantizará a los ciudadanos el cumplimiento de sus derechos.

“En la Constitución y en todas las decisiones que tomen los poderes públicos: el Legislativo, el Judicial, el Ejecutivo, ese concepto de sostenibilidad fiscal se va a tener que tener en cuenta, y eso le garantizará al resto de los ciudadanos que sus derechos fundamentales van a estar mejor protegidos”, concluyó el mandatario.

El fallo de la Corte

La Sala Plena de la Corte Constitucional avaló el pasado miércoles la reforma constitucional, que abre la posibilidad para que los ministros y la Procuraduría General de la Nación soliciten la modificación, modulación o disposición del pago de las cuotas establecidas en las sentencias emitidas por las cortes.

La reforma establece que la intervención del Estado en la economía nacional y territorial debe realizarse en un marco de sostenibilidad. Los fallos de tutela que representen un alto costo para el Estado podrían ser diferidos, pero no cambiados por solicitud del Gobierno. En opinión de la Corte, el acto legislativo “promueve la disciplina fiscal y blindo el manejo de las finanzas públicas en el mediano plazo”.

---

## **Suprimir cargos para contratar funciones a través de CTA viola garantías laborales 20 de Abril 11:22 AM**

El artículo 17 de la Ley 790 del 2002 prohibió a las entidades públicas celebrar contratos de prestación de servicios para cumplir de forma permanente las funciones propias de los cargos existentes.

Esta disposición impide la desnaturalización de la contratación estatal y, además, es una medida de protección de la relación laboral, explicó la Sección Segunda del Consejo de Estado.

La norma recuerda que el contrato de prestación de servicios en el Estado es una modalidad de vinculación excepcional, que solo se justifica para atender funciones ocasionales o labores que no puedan ejecutarse con empleados de planta o que requieran conocimientos especializados. Por eso, la corporación reiteró que la supresión de cargos en una entidad estatal, para contratar ilegalmente las funciones inherentes a ellos a través de cooperativas de trabajo asociado (CTA) es un proceso de deslaboralización, pues viola las garantías y los derechos de los trabajadores.

Permitir esa actuación implica dar vía libre a los nominadores para que desechen el concurso de méritos como regla general de ingreso a la función pública, evadan la responsabilidad prestacional y vulneren derechos como la estabilidad laboral, la remuneración mínima vital y la igualdad de oportunidades, advirtió el alto tribunal.

La sección resaltó que las CTA fueron creadas para facilitar el desarrollo asociativo y el cooperativismo, pero no para ser usadas como instrumentos que desconozcan la realidad del contrato de trabajo.

(Consejo de Estado, Sección Segunda, Sentencia 05001233100020040072401 (257007), C. P. Luis Rafael Vergara, oct.12/11)

---

### **Es posible responsabilizar a entidades estatales cuando contratistas contribuyen en daños o perjuicios causados**

La Corporación declaró responsable al Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales –Ideam por la muerte de Bertha Acosta quien perdió la vida en un accidente cuando se desplazaba en una camioneta de propiedad del Ideam que era conducida por su sobrino que transportaba funcionarios de la entidad.

Afirmó la Sala que si bien el conductor del vehículo no era funcionario de la entidad demandada, en anteriores oportunidades ha reiterado que “es posible imputar a las entidades estatales el daño causado por el hecho



de sus contratistas, de manera que aunque el señor Pedro Nel Acosta no estuviera unido a la entidad a través de un vínculo legal o reglamentario, no puede considerarse un tercero en esta relación, dado que al tratarse de un vehículo oficial al servicio de la entidad demandada, su guarda se encontraba en cabeza de ella y, por consiguiente, el contratista que conducía quedó igualmente integrado a la actividad pública desarrollada, concluyéndose entonces que la causal de exclusión propuesta por la parte demanda no está llamada a prosperar y que por el contrario, procede la atribución de responsabilidad patrimonial al ente demandado por el daño causado a los demandantes, a causa de la negligencia del mencionado conductor en permitir el acceso de la víctima al vehículo oficial". Consejo de Estado- Sentencia-2012-N

---

### **Presidente del Consejo de Estado pide intervención de organismos internacionales frente a la reforma a la justicia**

El presidente del Consejo de Estado, Gustavo Gómez Aranguren, planteó la posibilidad de acudir a la ONU para denunciar los excesos en los que estaría incurriendo el Congreso en el trámite del proyecto de reforma. Ante la ONU se denunciarían los excesos en los que está incurriendo el Congreso en el trámite del proyecto de reforma la justicia.

El máximo tribunal de lo contencioso administrativo sostuvo que se mantendrá al margen de la reforma y no volverá a las sesiones parlamentarias donde se discute la iniciativa. "Se llegó a un punto en que el debate está demasiado pervertido. La presencia del Consejo de Estado no reviste de ninguna autoridad", afirmó el magistrado.

---

23- 04 - 2012

### **La subordinación o dependencia es el que determina la diferencia del contrato laboral frente al de prestación de servicios**

El elemento de la subordinación o dependencia es el que determina la diferencia del contrato laboral frente al de prestación de servicios, ya que en el plano legal debe entenderse que quien celebra un contrato de

esta naturaleza, no puede tener frente a la administración sino la calidad de contratista independiente sin derecho a prestaciones sociales; a contrario sensu, en caso de que se acredite la existencia de un trabajo subordinado o dependiente consistente en la actitud por parte de la administración contratante en impartir órdenes a quien presta el servicio con respecto a la ejecución de la labor contratada, así como la fijación de un horario de trabajo para la prestación del servicio, se tipifica el contrato de trabajo con derecho al pago de prestaciones sociales, así se le haya dado la denominación de un contrato de prestación de servicios independiente.

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN SEGUNDA  
Consejero Ponente: Dr. Víctor Hernando Alvarado Ardila Actor: Nora María Silva Buitrago Bogotá D.C., Septiembre 22 de 2011 Ref: Expediente No. 25000232500020080021201.- No. Interno: 0952-2011

---

**El silencio administrativo positivo opera para el contribuyente cuando después un año los recursos de reconsideración y reposición no han sido resueltos**

El reconocimiento del silencio administrativo positivo, está condicionado a que la administración no resuelva el recurso dentro del año siguiente a su interposición, de tal forma que una vez ocurrido el presupuesto legal, y por mérito de la ley, el recurso se entiende fallado a favor del contribuyente, circunstancia que además debe ser reconocida, bien sea oficiosamente por la administración o a petición de parte.

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN CUARTA  
Consejero Ponente: Hugo Fernando Bastidas Bárcenas Actor: Schlumberger Surencó s.a., contra el Municipio de Tauramena Bogotá, D.C., Enero 19 de 2012 Radicación No.: 85001-23-31-000-2007-00120-01(17578)

---

**Corte ordena a varias empresas a reintegrar trabajadores despedidos por sufrir discapacidad o por incapacidad laboral**

Las situaciones relacionados en los diferentes procesos acumulados tienen como hecho común que las empresas demandadas dan por

terminadas las relaciones laborales con los demandantes, de manera unilateral y por presunta justa causa, sin acatamiento de las normas legales y jurisprudenciales existentes, las cuales protegen la estabilidad laboral de las personas con discapacidad o en períodos de incapacidad laboral. La Sala aborda el estudio de los siguientes cuatro puntos: 1. Procedencia de la acción de tutela contra particulares; 2. Improcedencia general de la acción de tutela para obtener reintegro laboral y sus excepciones; 3. Protección laboral reforzada de los trabajadores con discapacidad y en período de incapacidad laboral, y,

4. Facultad limitada del empleador de terminar el contrato laboral por incapacidad superior a 180 días. Finalmente, tutela los derechos invocados por los actores e imparte órdenes a las empresas accionadas, tendientes a lograr el reintegro y el pago de los salarios y prestaciones sociales dejadas de percibir. Derechos: Vida digna, igualdad, seguridad social, estabilidad laboral reforzada.

---

### **Administración, imprevistos y utilidad – AIU las entidades solo pueden pagar los imprevistos que se acrediten**

La Contraloría General de la República reiteró que todas las entidades estatales y los administradores de recursos públicos, tienen la obligación de soportar debidamente la totalidad de los recursos ejecutados que estén a su cargo, sin excepción de porcentaje alguno; como es por ejemplo el caso de los imprevistos.

En el concepto se advierte que si una entidad estatal pacta un porcentaje para cubrir imprevistos no imputables al contratista, y durante la ejecución del contrato no ocurren, las partes en la liquidación del mismo deberán dejar constancia de esta situación. Se concluye que si se evidencia que no hubo imprevistos, la entidad estatal no deberá pagarlos.

En este sentido, si la entidad estatal paga imprevistos sin que estos hayan ocurrido, o paga imprevistos imputables al contratista, configura un detrimento patrimonial que será objeto de acción fiscal por parte de la contraloría.

## **Función de Advertencia**

### **Contraloría pide al gobierno nacional endurecer reglamentación de licencias ambientales abril 18 de 2012**

La Contraloría General de la República advierte sobre los riesgos de daño ambiental derivados del actual proceso de licenciamiento, especialmente para páramos, humedales, parques nacionales, reservas naturales y lugares de especial interés científico o de valor arqueológico, cultural o histórico.

---

### **Cosa juzgada en demanda contra norma que derogó el reconocer incentivos económicos para acciones populares**

Corte Constitucional-Sentencia-2011-N

La demanda contra la Ley 1425 de 2010 se sustenta en los siguientes cargos: 1. Omisión legislativa relativa; 2. Violación al principio internacional de progresividad y no regresividad en materia de mecanismos de protección de derechos económicos, sociales y culturales; 3. Vulneración al preámbulo y el contenido de algunos artículos de la constitución; 4. Violación de los principios constitucionales de prevalencia del interés general, trabajo, solidaridad y participación; 5. Violación de los principios de buena fe y confianza legítima; 6. Vicio material de competencia y procedimiento, por cuanto debió ser tramitada como una ley estatutaria, y, 7. Violación al límite de libertad de configuración del legislador en materia de derechos colectivos en detrimento de los artículos 1, 2, 88 y 89 de la Constitución Política.

---

### **A través de derecho de petición, no puede solicitarse información sujeta a reserva bancaria**

El demandante, en representación de la Veeduría Ciudadana por Puerto Colombia, instauró la acción contra Bancolombia por estimar vulnerado

el derecho fundamental de petición, en tanto la entidad bancaria no dio respuesta a su solicitud de información y fotocopia de los documentos relacionados con el traslado interno de los dineros contenidos en una cuenta corriente a nombre del municipio de Puerto Colombia, por considerar que dicha información está sujeta a reserva bancaria.

A su vez, la demandada argumentó haber dado respuesta a la petición, aunque presentó inconvenientes en la entrega de la misma, por imposibilidad de contactar al solicitante.

La Sala resalta la importancia que comportan las veedurías ciudadanas como mecanismo de control social de la gestión pública y reitera jurisprudencia constitucional que versa sobre el derecho de petición. Corte Constitucional-Sentencia-2012-N

---

**Como alumbrado público no es servicio domiciliario sino impuesto, será el Concejo Municipal quien defina la tarifa**

“Respecto del análisis y el pronunciamiento por parte de esta Entidad sobre acuerdos municipales que fijan las tarifas de alumbrado público, tal como se indicó anteriormente, siendo que el alumbrado público no es un servicio público domiciliarios, sino un impuesto, serán el Concejo Municipal y el Alcalde respectivo, las autoridades que definan la tarifa del mismo, cuya legalidad corresponde establecerla a la jurisdicción contenciosa administrativa”. SuperServicios-Concepto-2012-N0000009 2012/01/05

---

21- 04 - 2012

**Reintegro por orden judicial es de obligatorio cumplimiento**  
Departamento Administrativo de la Función Pública Concepto 241 de 2012

Cuando se ordena el reintegro a un cargo debe efectuarse dentro de unos márgenes de equivalencia entre el que se desempeñaba al momento del retiro y aquél en el cual pueda hacerse efectivo.

De manera que el reintegro debe cumplirse en la misma entidad, con equivalente ubicación y funciones similares a las desempeñadas por el trabajador al momento de la supresión del cargo, para que no resulte desmejorado en sus condiciones laborales.

---

### **Corte ordena a varias empresas a reintegrar trabajadores despedidos por sufrir discapacidad o por incapacidad laboral**

CorteConstitucional-T-2012-N0089 (T-3183529, T-3192319, T-3195321 y T-3211857) Sentencia 2012/02/16

Las situaciones relacionados en los diferentes procesos acumulados tienen como hecho común que las empresas demandadas dan por terminadas las relaciones laborales con los demandantes, de manera unilateral y por presunta justa causa, sin acatamiento de las normas legales y jurisprudenciales existentes, las cuales protegen la estabilidad laboral de las personas con discapacidad o en períodos de incapacidad laboral.

La Sala aborda el estudio de los siguientes cuatro puntos: 1. Procedencia de la acción de tutela contra particulares; 2. Improcedencia general de la acción de tutela para obtener reintegro laboral y sus excepciones; 3. Protección laboral reforzada de los trabajadores con discapacidad y en período de incapacidad laboral, y,

4. Facultad limitada del empleador de terminar el contrato laboral por incapacidad superior a 180 días. Finalmente, tutela los derechos invocados por los actores e imparte órdenes a las empresas accionadas, tendientes a lograr el reintegro y el pago de los salarios y prestaciones sociales dejadas de percibir. Derechos: Vida digna, igualdad, seguridad social, estabilidad laboral reforzada.

---

### **Empleador debe efectuar los aportes a salud y pensión del trabajador reintegrado respecto al tiempo que no laboró** (Minsalud, Concepto 20359, 2/6/2012 )

Corresponde al empleador efectuar los aportes a salud y pensiones a los que estaba obligado respecto del trabajador reintegrado, teniendo en

cuenta que el fallo judicial que ordena el reintegro también indica el pago de salarios y prestaciones sociales dejados de percibir, como si la persona hubiera laborado durante el tiempo en que estuvo retirada del servicio, es decir, sin solución de continuidad, señaló el Ministerio de Salud. Si durante el tiempo de desvinculación, el trabajador laboró y cotizó en salud, los aportes deben ser girados a la entidad promotora de salud a la que haya estado afiliado como dependiente o independiente.

---

### **Asamblea departamental del valle del cauca desconoció lineamientos constitucionales en el ejercicio de la actividad tributaria**

En materia tributaria la facultad impositiva de los entes territoriales no es originaria sino derivada. Del contenido del artículo 75 de la Ley 181 de 1995, no era posible inferir la creación de un tributo en cabeza de los usuarios de servicios de telecomunicaciones. Por ello, la Asamblea desconoció lineamientos constitucionales para el ejercicio de la actividad tributaria.

En consecuencia, la Ordenanza 161 de 2003 creó un tributo sin que existiera norma superior que fijara los respectivos parámetros del gravamen, careciendo de competencia derivada para desarrollarlo, por la que se debía declarar la nulidad de la Ordenanza y confirmar la de los acuerdos demandados.

Confirma. M. P. María Elizabeth García González. Documento Disponible al Público en Abril de 2012. Temas: Entidades Descentralizadas. Actividad Contractual. Autonomía Tributaria Local. Elementos del Tributo. Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Primera Expediente 2007 00112 de 2012

---

20 - 04 - 2012

### **Gobierno señala alcances del nuevo reglamento de la contratación pública**

(El Decreto 734 el pasado 13 de abril no solo compila la reglamentación existente en materia de contratación pública, sino que regula disposiciones de la Ley 1450 del 2011 (Plan Nacional de Desarrollo

2010-2014), la Ley 1474 del 2011 (Estatuto Anticorrupción) y el Decreto 19 del 2012 (decreto-ley antitrámites), entre otras, y recoge interpretaciones de la Corte Constitucional y el Consejo de Estado sobre el Estatuto General de Contratación Pública.

A través de un comunicado, el Gobierno explicó los principales cambios de la nueva normativa, que deroga 27 decretos reglamentarios existentes desde el año 1994. Los procesos contractuales en curso a la fecha de expedición del Decreto 734 del 2012 podrán continuar hasta su culminación con las normas vigentes al momento de la apertura o, por medio de adendas, ajustarse a las nuevas disposiciones, agrega el pronunciamiento oficial.

---

(Departamento Nacional de Planeación)

## DEROGAN 27 DECRETOS REGLAMENTARIOS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA

El Gobierno nacional anunció la expedición del decreto 734 del 13 de abril de 2012, mediante el cual se reglamenta el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, derogando así 27 decretos reglamentarios existentes desde el año 1994. Dicho acto administrativo entró a regir desde el mismo día según la gaceta 48.400 del Diario Oficial.

Con la expedición del decreto, el Gobierno busca darle a la ciudadanía y a las entidades estatales sometidas el Estatuto Contractual, una regulación ágil y expedita que permita lograr la ejecución de la ley y que recoja en un solo cuerpo normativo las reglas necesarias para el adelantamiento de los procesos contractuales, de los contratos y otros asuntos relacionados y que, en atención a la dinámica de la materia a reglamentar, permita las actualizaciones y ajustes continuos necesarios.

En dicho decreto no solo se reúne la reglamentación existente relacionada directamente con la contratación pública, la cual se ordenó de manera temática al interior del mismo, sino que adicionalmente se recoge el entendimiento que sobre el Estatuto ha fijado la Corte Constitucional y el Consejo de Estado, así como se integran las



observaciones de la comunidad en general y entidades públicas recibidas a través del Secop y medio escrito.

De la misma manera, en el decreto se reglamentan, de manera adicional, apartes normativos relacionados con la contratación pública planteados en las leyes 1450 y 1474 de 2011, así como en los Decretos Leyes 4170 de 2011 y 19 de 2012, entre otras.

Del decreto 734 de 2012 cabe destacar su novedoso sistema numérico, en sus 361 artículos, a través del cual se identifica cada artículo según su posición en la estructura de la norma en mención. Así, según el Título, Capítulo, Sección y Subsección, el articulado obedecerá a la numeración consecutiva que corresponda de acuerdo a su ubicación, lo que permitirá precisamente la actualización permanente de la reglamentación acorde a las realidades cambiantes del mercado, sin traumatismos para la ciudadanía y entidades públicas.

#### Principales cambios introducidos

Entre otros cambios, cabe resaltar las siguientes modificaciones que introduce la nueva reglamentación del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública:

1. Se compagina la reglamentación de riesgos previsibles con el Conpes 3714 de 2011.
2. La publicidad en el Secop es fortalecida conforme los recientes cambios legales.
3. En la subasta inversa se establece una negociación obligatoria cuando solo un proponente queda habilitado.
4. Se regulan los criterios de selección del concurso de méritos bajo el entendimiento dado por el Consejo de Estado y se introducen unas aclaraciones respecto de la precalificación.
5. En materia de contratación directa la normativa se articula con lo establecido en el Estatuto Anticorrupción y la ley de garantías electorales.

6. Referente a la enajenación de bienes del Estado, se introducen aclaraciones respecto de la forma de hacer su avalúo y procedimiento de venta.
7. En lo que refiere a las Mipymes, se establecen de nuevo las convocatorias limitadas con criterios diferenciales entre las Mypes y Mipymes así como se regulan beneficios para la oferta de bienes y servicios producidos por las Mipymes.
8. De conformidad con la ley 361, se incorporan dentro de los factores de desempate, a las empresas que tengan vinculado dentro de su personal discapacitados en los términos establecidos en dicha normativa.
9. Sobre el régimen de garantías contractuales, se hacen reformas puntuales con el objeto de aclarar algunos aspectos que en la práctica generaban dificultades.
10. Se reglamenta la modificación introducida por el decreto ley 19 de 2012 en materia de RUP bajo la premisa de un avanzado sistema de verificación de requisitos habilitantes por parte de las cámaras de comercio, con una mayor cantidad de indicadores que permitirán a las entidades públicas contar con mayor información de los proponentes de acuerdo a su actividad sin ser calificados, y un sistema de clasificación simplificado y unificado con otros sistemas denominado CIIU. Este nuevo sistema cuenta con un régimen propio de transición.
11. Se introducen medidas para la implementación de los acuerdos comerciales con otros países y la incorporación de las reglas previstas en los capítulos de compras públicas de los mismos, en los procesos contractuales cuya cobertura cubije.
12. Se reglamenta lo relacionado con la administración de los anticipos en aquellos casos no regulados por la Ley 1474, haciendo que su manejo se de en cuenta bancaria separada, no conjunta, del contratista, con el objeto de facilitar la labor del supervisor e interventor en el control de los desembolsos y correcta aplicación a la ejecución del contrato respectivo.

13. Se crea el Plan de adquisiciones de bienes, servicios y obra pública en el cual se fortalecerá el principio de planeación contractual y se hará visible para toda la comunidad a través del Secop.

#### Régimen de transición

Cabe precisar que el decreto prevé para los procesos de contratación en curso un régimen de transición establecido en el decreto, según el cual, a la fecha de la su expedición, los procesos que cuenten con acto administrativo de apertura, la entidad contratante podrá continuar el proceso hasta su culminación con las normas vigentes al momento de su apertura o podrá por medio de adendas ajustar el proceso a las disposiciones contenidas en el mismo. Para los procesos que no hubieren sido abiertos, se establece la obligatoriedad de acogerse a la nueva normativa.

De conformidad con el artículo 14 de la ley 153 de 1887, las normas de derogatorias abolidas por las que se derogan en el decreto 734 de 2012, no reviven por el hecho de su derogatoria. En consecuencia, las normas subrogadas en el decreto en referencia quedan subsumidas dentro del presente decreto y las situaciones consolidadas durante su vigencia no pierden validez.

Los demás aspectos podrá observarlos en el cuerpo del decreto que se publica en el Secop ([www.contratos.gov.co](http://www.contratos.gov.co)).

---

19 – 04 -2012

#### **Pago de intereses moratorios derivados del pago de sentencias judiciales conduce indefectiblemente a un hallazgo fiscal - Contraloría –Concepto**

“Teniendo en cuenta las inquietudes formuladas en el oficio de consulta, se concluye que no puede afirmarse prima facie que el pago de intereses moratorios derivados del pago de sentencias judiciales conduce indefectiblemente a la constitución de un hallazgo de tipo fiscal.

Esta valoración y decisión sólo puede adoptarse en la medida que la administración no demuestre la actuación diligente y pronta de sus agentes, a fin de satisfacer su obligación relacionada con el pago

efectivo y pronto de las condenas judiciales que les son dictadas en su contra”.

---

### **Recursos del sistema general de riesgos profesionales no se pueden destinar para actividades de salud ocupacional - Consejo de Estado- Sentencia-2012-N**

Sancionada administradora de riesgos profesionales por asumir gastos de salud ocupacional que son del cargo del empleador con dineros públicos de destinación específica.

La Corporación afirmó que “los recursos del Sistema General de Riesgos Profesionales, no están destinados para suplir o financiar este tipo de actividades orientadas a la Salud Ocupacional, como quiera que tienen carácter de dineros parafiscales o públicos que deben ser invertidos en actividades específicas, por cuanto su mala inversión o utilización por parte de quienes se benefician o administran dichos recursos (empleadores, empleados o trabajadores de ARP) genera violación de la ley”.

Explicó que de acuerdo con lo previsto en los artículos 5 y 10 de la Resolución 001016 de 1989 “los exámenes médicos hacen parte del Programa de Salud Ocupacional para empresas y lugares de trabajo, cuya ejecución compete a patronos y empleadores”.

A juicio de la Sala acertó el Ministerio al sancionar a La Previsora Vida S.A. por “haber sustituido a Distrisalud y a la Areonáutica Civil en sus obligaciones como empleador al asumir la práctica de los exámenes de sus trabajadores y la asignación de los siguientes profesionales especializados en salud ocupacional: un Ingeniero Ambiental o Sanitario, Industrial, una Fisioterapeuta y un Psicólogo.

De lo anterior se desprende que para el cumplimiento de las mencionadas actividades, la ARP utilizó, o bien financió, estos servicios con dineros pertenecientes al Sistema General de Riesgos Profesionales, incurriendo de esta manera en la vulneración de disposiciones de orden legal que prohíben destinar los dineros públicos para fines diferentes a los ya establecidos”. Ver sentencia adjunta.

---

## **Gobierno señala alcances del nuevo reglamento de la contratación pública** (4:53 p.m.) (Departamento Nacional de Planeación, Comunicado, 04/19/2012 )

El Decreto 734 el pasado 13 de abril no solo compila la reglamentación existente en materia de contratación pública, sino que regula disposiciones de la Ley 1450 del 2011 (Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014), la Ley 1474 del 2011 (Estatuto Anticorrupción) y el Decreto 19 del 2012 (decreto-ley antitrámites), entre otras, y recoge interpretaciones de la Corte Constitucional y el Consejo de Estado sobre el Estatuto General de Contratación Pública.

A través de un comunicado, el Gobierno explicó los principales cambios de la nueva normativa, que deroga 27 decretos reglamentarios existentes desde el año 1994. Los procesos contractuales en curso a la fecha de expedición del Decreto 734 del 2012 podrán continuar hasta su culminación con las normas vigentes al momento de la apertura o, por medio de adendas, ajustarse a las nuevas disposiciones, agrega el pronunciamiento oficial.

---

## **Consejo Asesor del Gobierno en materia de control interno es el organismo competente para conceptuar sobre el tema - Contraloría --Concepto--2012-N**

“Se considera que de conformidad con esta norma que, en razón a haber iniciado el periodo actual de Alcaldes y Gobernadores el pasado mes de enero, y como quiera que la norma ordena que el jefe de Control Interno de las entidades territoriales deberá ser designado “... en la mitad del respectivo periodo...”, ha de entenderse que los actuales jefes de esa dependencia deberán mantenerse hasta que se cumpla la condición del artículo 8º de la Ley 1474 de 2011. No obstante, reiteramos que es el Consejo Asesor del Gobierno en Materia de Control Interno, adscrito al Departamento Administrativo de la Función Pública; el competente para determinar las directrices para la aplicación de la norma en mención”.

---

## **No es viable autorizar pasantías no remuneradas: Contraloría**

“Las prácticas académicas implican la realización de un trabajo toda vez que en ellas se imprime la realización de un esfuerzo en una labor sea cual fuere su denominación. Todo trabajo debe ser remunerado en salario o en especie, dicha remuneración es un derecho irrenunciable del trabajador y no se puede ceder en todo o en parte, a título gratuito ni oneroso. (Art. 142 C.S.T.)”.

La Gerencia Administrativa y Financiera de la Contraloría General de la República es la Dependencia autorizada para tramitar los documentos relacionados con las pasantías y/o prácticas, y/o judicatura”.

---

### **Confirman revocatoria de condena de 30 años de prisión a posibles miembros de secta satánica que acabaron con la vida de un menor de 15 años**

Para la Sala, el testimonio rendido por el hermano mayor de la víctima quien colaboró con la muerte de su hermano, no tenía la credibilidad suficiente que permitiera la condena de los acusados, pues dicho sujeto mostraba una conducta psicótica que impedía la credibilidad de su relato.

Por otra parte, fracasa la casación por cuanto, el extraordinario recurso no sirve para contemplar la racionalidad de otras explicaciones, teorías o hipótesis que podrían solucionar el caso.

Concluyó que “todos los funcionarios públicos que intervienen en el proceso penal, pero en especial el juez, deben abordar de manera razonable la racionalidad de los demás. Sobre todo, al apreciar los elementos de prueba que atañen a otros modelos de vida o culturas disímiles a la propia, no pueden dejarse llevar por creencias, supersticiones o fábulas, ni mucho menos tratar de imponer criterios valorativos que respondan a paternalismos éticos, impulsos teocráticos o sentimientos de superioridad moral que riñen con el modelo de vida de cada uno e ignoran la realidad de una sociedad plural como la colombiana”.

No Casa. M. P. Julio Enrique Socha Salamanca. Documento Disponible al Público en Abril de 2012. Temas: Valoración Probatoria. Homicidio Agravado. Rituales Satánicos. Insuficiencia Probatoria.

---

## **Ejecuciones extrajudiciales están proscritas en el Estado social de derecho** 18 de Abril 5:00 PM

Las ejecuciones extrajudiciales y extralegales de personas están proscritas en el Estado social de derecho, advirtió el Consejo de Estado.

El Estado debe garantizar, como uno de sus fines esenciales, la protección de todos los ciudadanos, toda vez que la Constitución respalda la primacía de los derechos inalienables de la persona y el respeto a la dignidad humana, indicó el alto tribunal.

Por otra parte, la corporación resaltó que el deber de protección de la vida, la libertad y la integridad personales no se sustenta solo en las normas de derecho interno, sino también en las disposiciones del ámbito internacional.

Con estos argumentos, señaló que resultaba gravísimo que el propio Estado, siendo responsable de la protección de los derechos humanos, termine direccionando a sus agentes a desconocer esos valores fundantes del Estado social de derecho.

La Sección Tercera declaró responsable a la Policía Nacional por la muerte de dos personas en 1994, a manos de un grupo de "limpieza social" de Yarumal (Antioquia), en el que participaban miembros de esa institución.

(Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia 05001232500019960028601 (21521), feb. 8/12, C. P. Ruth Stella Correa Palacio)

---

17 - 04 - 2012

## **Dirección Jurídica ofrece a servidores públicos portal de actualización**

La Dirección Jurídica ofrece a los abogados y servidores públicos en general, la actualización jurídica permanente a través del portal

www.noticieroficial.com el cual no requiere claves de acceso desde las sedes de la Alcaldía de Cali. Tendrán oportunidad de consultar el Noticiero Oficial, con la actualización diaria realizada por profesionales altamente calificados.

El portal cuenta con una gran base de datos de legislación, jurisprudencia y doctrina, más de 92 códigos actualizados y concordados con declaraciones de inexequibilidades y nulidades. De igual forma encontrarán diccionarios: jurídico, contable, financiero, aduanero, de seguros, electoral y de términos contables.

Además de las consultas en el Centro de Documentación, ofrece atención personalizada en caso de no encontrar en la página la información requerida, modelos de minutas en materia Civil, Laboral, Penal, entre otras.

Contiene buscador de leyes desde 1992 y normatividad vigente por sectores: Constitucional, Administrativa, Aduanera, Civil, Contratación Pública, Electoral, Función Pública y Laboral. Acuerdos y Ordenanzas de las principales ciudades del país en materia de impuestos y la Agenda legislativa programada en el Congreso de la República.

Como valor agregado en www.noticieroficial.com encontrarán asesoría en línea, el cual permite un contacto directo y permanente con los asesores, quienes se encargarán de resolver cualquier inquietud o inconveniente que se presente con el servicio. Noticias por sectores para visualizar la última información que trate temas correspondientes al área de su interés.

Encontrará indicadores económicos del día y un amplio historial de los mismos e información actualizada minuto a minuto del Mercado Bursátil. En el paquete tributario encontrarán las exenciones del GMF (Gravamen a los Movimientos Financieros), Cifras Tributarias y Calendario Tributario.

“Esperamos que todos los abogados y servidores públicos en general utilicen este servicio que ofrece la Dirección Jurídica, con el propósito de fortalecer sus competencias y aptitudes laborales, en un mundo que mantiene en permanente cambio”, señaló el Subdirector Jurídico, Edgar José Polanco Pereira.



Si tiene algún inconveniente con el acceso favor comunicarse al 8896744 Biblioteca Jurídica – Claudia Salas Martínez – Procedimiento: Difusión de Información Jurídica.

---

**Liquidación bilateral o voluntaria de contratos. Puede demandarse los temas sobre los cuáles se ha manifestado desacuerdo**

El Consejo de Estado sentenció que cuando ha habido una liquidación bilateral o voluntaria de un contrato estatal, sólo se puede demandar al Estado por aquellos temas sobre los cuáles el contratista hubiere manifestado desacuerdo al momento de la liquidación final del contrato, pues el acta de liquidación bilateral es ley para las partes y si no se deja en el acta constancia concreta de la reclamación, se entiende que no existe inconformidad. (Código Civil, art. 1602)

El Consejo de Estado explicó que si bien las observaciones o salvedades a la liquidación bilateral no son un requisito de procedibilidad para acudir ante la Jurisdicción, si son un presupuesto de orden material en el marco de la legitimación en la causa por activa, en orden a lograr la prosperidad de las pretensiones.

Precisamente las salvedades que se consignan en el acta de liquidación tienen la finalidad de salvaguardar el derecho del contratista a reclamar en el futuro ante la autoridad judicial el cumplimiento de aquellas obligaciones que a su juicio hubieren quedado pendientes o impagadas durante la ejecución del contrato y por esta razón deben cumplir los siguientes requisitos:

1. Deben ser expresas, claras y concretas. De otra manera, su inclusión resulta ineficaz.
2. Deben identificar adecuadamente los problemas surgidos con ocasión del contrato. Esta descripción debe hacer referencia a aquellos hechos o situaciones que se conocían o que, razonablemente, se podían conocer al momento de suscribir el acta, toda vez que tal exigencia no se presenta cuando se trata de formular reclamaciones respecto de circunstancias posteriores, desconocidas o imposibles de conocer al momento de suscribir el acta. Se adjunta sentencia.

---

### **Contraloría es competente en procesos de responsabilidad fiscal contra magistrados del Consejo Superior: Consejo de Estado**

La Sala de Consulta del Consejo de Estado declaró que “la Contraloría General de la República es competente para adelantar los procesos de responsabilidad fiscal en contra de los Magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura doctores José Ovidio Claros Polanco, Julia Emma Garzón de Gómez, Henry Villarraga Oliveros y Pedro Alfonso Sanabria Buitrago, por el presunto detrimento patrimonial que se podría haber causado para el Estado con ocasión del nombramiento de magistrados auxiliares en los despachos de que son titulares”. Así la Corporación resolvió el conflicto de competencias administrativas entre la Contraloría General de la República y la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes.

Advirtió que “en el listado de organismos que ejercen el control fiscal brilla por su ausencia el Congreso de la República y, en particular, la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, lo cual resulta concordante con las disposiciones constitucionales y las sentencias de la Corte Constitucional analizadas en la presente decisión, que ratifican la competencia de la CGR para ejercer, de manera exclusiva y excluyente, la vigilancia de la gestión fiscal”.

---

### **Colegios público y privado son responsables solidariamente por muerte de estudiante**

La Corporación condenó en forma solidaria al municipio de Ciudad Bolívar y a la Cooperativa Especializada de Educación 'Alejandrino Restrepo' al pago de los perjuicios que sufrieron los demandantes por la muerte de menor de edad. Para la Sala “se encuentra plenamente demostrada la falla del servicio por omisión de las demandadas en el cumplimiento del deber legal y constitucional de garantizar las condiciones necesarias de seguridad, encaminadas a proteger la vida e integridad de los alumnos por sustraerse del deber de custodia y vigilancia que su posición de garante le impone”. Consideró que “no hay duda de que los maestros y directivos de la Escuela Urbana Integrada

Isabel Solís, así como el municipio de Ciudad Bolívar tenían la obligación de vigilancia de los menores puestos bajo su tutela por los padres”.

De otra parte, el Alto Tribunal explicó que como el accidente que le ocasionó la muerte al menor “acaeció dentro de las instalaciones de la Cooperativa Especializada en Educación 'Alejandrino Restrepo Ltda.', su responsabilidad igualmente se ve comprometida en la ocurrencia del daño por cuanto, de una parte, los menores fueron conducidos a ese establecimiento educativo por iniciativa y decisión de una de sus propias alumnas que se encontraba efectuando la práctica de alfabetización y, de otra, aún más relevante, en razón a que a pesar de tratarse de una institución de carácter educativo, de manera imprudente, negligente y violatoria de requisitos mínimos de seguridad permitió el uso de una portería de fútbol sin fijación al suelo exponiendo al riesgo de que en cualquier momento se viniera abajo y causara un siniestro, como en efecto sucedió en el caso de autos, no solo a sus propios alumnos sino a cualquier otra persona que ingresara al lugar”. Consejo de Estado-Sentencia-2012-N

---

**La finalidad del recurso de revisión no es la de recuperar una prueba, producirla o mejorarla**

Consejo de Estado – Sección Tercera. Revisión 00474-02. 07/03/12.

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo ha sostenido que “no es lo mismo recuperar una prueba que producirla o mejorarla, por cuanto no es esa la finalidad del recurso extraordinario de revisión, pues de lo contrario, no habría jamás cosa juzgada, porque bastaría que el litigante vencido en juicio mejorara la prueba en el recurso de revisión o produjera otra, así lo ha precisado la jurisprudencia en forma reiterada”.

La Corporación afirmó que en este caso “no se configura la causal de revisión invocada por la parte recurrente, puesto que de manera alguna se recobraron documentos decisivos, con los cuales se hubiera podido proferir una decisión diferente en la sentencia que se recurre de manera extraordinaria y que los recurrentes no hubieren podido aportar al proceso por fuerza mayor o caso fortuito o por obra de la parte contraria”.

La Sala negó el recurso extraordinario de revisión instaurado contra la sentencia que no accedió a las pretensiones de la demanda instaurada contra Aerocivil por la muerte de un inspector de control técnico y seguridad. Los demandantes señalaron que el funcionario “puso en conocimiento de sus superiores las irregularidades que se presentaban en el Aeropuerto Matecaña de la Ciudad de Pereira en relación con el tráfico de estupefacientes; como consecuencia de su proceder recibió amenazas contra su vida, de lo cual informó a sus superiores por medio de oficio presentado el 31 de mayo de 1999 sin obtener respuesta alguna ni mucho menos protección”. Consejo de Estado- Revisión-2012-N

---

### **Ordenan a Emcali reintegrar a empleado a su puesto de trabajo y pagarle prestaciones causadas**

La Corporación no admitió el recurso de casación interpuesto por Empresas Municipales de Cali – Emcali EICE ESP, para que esta Sala de la Corte casara la sentencia que condenó a la entidad a reintegrar a Óscar Granada al cargo que venía desempeñando.

El Tribunal Superior de Cali declaró además que no hubo solución de continuidad en el contrato celebrado entre las partes y por ende la condenó a cancelar al demandante “a partir del 8 de julio de 2002, los salarios y prestaciones legales y extralegales a que tenga derecho desde la fecha del despido hasta se (sic) haga efectivo su reintegro, sumas que deberán ser indexadas hasta que se realice su pago”. La Sala no casó la sentencia. Corte Suprema de Justicia-Sentencia-2012-N - Ver adjunto.

---

### **Contraloría imputó responsabilidad fiscal por \$13.951 millones contra ex director de Invias y seis implicados**

La Contraloría General de la República imputó cargos de responsabilidad fiscal contra seis ex funcionarios y un ex contratista del Invias por un detrimento patrimonial de \$13.951 millones de pesos, que se dio al no ejercer una adecuada defensa del Estado en el trámite de una millonaria conciliación del instituto con el consorcio conocido como Conigravas S.A.

---

### **Internet para todos los usuarios del Sisbén: Mintic**

Las personas que pertenecen al Sisbén, no perderán los beneficios al recibir subsidio para Internet. El Gobierno del Presidente Santos avanza en la masificación del uso de Internet como herramienta para disminuir la pobreza y fomentar el desarrollo.

Como resultado de los compromisos adquiridos durante el Acuerdo para la Prosperidad Vive Digital, realizado en el mes de febrero en Manizales, los usuarios del Sisbén no perderán su categoría en caso de ser beneficiados con subsidios para acceder a Internet. Ministerio de Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones. Ver comunicado.

---

### **Por conducir en estado de embriaguez vehículo oficial, sancionan a exconcejal de Bogotá, Ati Seygundiba Quigua**

La Procuraduría General de la Nación confirmó la sanción de suspensión en el ejercicio del cargo por el término de seis meses, a la exconcejal de Bogotá Ati Seygundiba Quigua Izquierdo, por indebido uso de vehículo oficial al conducirlo en estado de embriaguez.

Los hechos investigados ocurrieron el 3 de noviembre de 2010, cuando la señora Ati Seygundiba Quigua Izquierdo, en estado de embriaguez, colisionó el vehículo que conducía contra el edificio ubicado en la carrera 4 A # 25C 17 de Bogotá. Procuraduría General de la Nación

---

### **Se crea la subdirección LGBT en Bogotá**

Mediante Decreto 149 de 2012, el alcalde Mayor de Bogotá, Gustavo Petro Urrego, se modifica la estructura organizacional de la Secretaría de Integración Social para la creación de la Subdirección para Asuntos LGBT. Esta Subdirección, nace en el marco de la Política Pública para la Garantía Plena de derechos de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Transgeneristas y sobre orientaciones sexuales e identidades de género en Bogotá.

---

**Un aspirante al congreso no puede gestionar negocios ante entidades de carácter oficial dentro de los 6 meses anteriores a la elección**

La finalidad que inspiró al legislador a prohibir que el aspirante al Congreso gestione negocios ante entidades de carácter oficial dentro de los 6 meses anteriores a la elección, consiste en evitar que el candidato se beneficie de la circunstancia de acercamiento y de contactos ante tales entidades de carácter público y desarrolle actuaciones que se traduzcan en favorecimientos de doble vía a los cuales no acceden los otros candidatos, lo que desequilibra la igualdad que debe presentarse entre todos los que participan en la contienda electoral.

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN QUINTA  
Consejera Ponente: Susana Buitrago Valencia Actores: Hugo Alberto Gnecco Arregoces Hernando José Escobar Medina Bogotá D.C., Febrero 23 de 2012 Exp. Acumulado N°: 11001-03-28-000-2010-00038-00,11001-03-28-000-2010-00100-00 Radicados Internos: 2010 – 0038, 2010 – 0100

---

16 - 04 - 2012

**Se reglamenta el estatuto general de contratación de la administración pública**

El presente decreto reglamenta las disposiciones legales contenidas en el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, así como otras disposiciones legales aplicables a la contratación estatal.

DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN - Abril 13 de 2012 - Decreto No. 0734

---

**Es necesario que se configure una emergencia imprevista para que proceda la expropiación administrativa**

La expropiación administrativa también se presenta luego de fracasada la negociación entre la administración y el propietario, pero que es excepcional en la medida en que es necesario que se configure una

emergencia imprevista, en cuyo caso la ley autoriza la declaración de urgencia para adquirir el predio, es decir, sólo procede cuando la destinación del bien expropiado sea para alguno de los fines previstos expresamente en la ley (artículo 63 Ley 388 de 1997), previa declaratoria de urgencia, cuyas causales también están expresamente delimitadas en la misma normativa (artículo 65, ibídem).

Además, de conformidad con lo previsto en el artículo 64 ibidem, que la declaración de las condiciones de urgencia que autorizan la expropiación, sea realizada por la instancia o autoridad competente, según lo determine el concejo municipal o distrital, o la junta metropolitana, según sea el caso, mediante Acuerdo.

Consejo de Estado - SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA - Consejera Ponente: Maria Claudia Rojas Lasso - Actor: Country Club de Bogota, contra el Instituto Distrital para el Deporte I.D.R.D. Bogotá, D.C., Febrero 09 de 2012 Radicación No.: 25000-23-24-000-2001-01262-01

---

### **Elementos que configuran la responsabilidad por el riesgo excepcional del estado**

Según la teoría de la Responsabilidad por el riesgo excepcional, el Estado compromete su responsabilidad cuando quiera que en la construcción de una obra o en la prestación de un servicio, desarrollados en beneficio de la comunidad, emplea medios o utiliza recursos que colocan a los administrados, bien en sus personas o en sus patrimonios, en situación de quedar expuestos a experimentar un “riesgo de naturaleza excepcional” que, dada su particular gravedad, excede notoriamente las cargas que normalmente han de soportar los administrados como contrapartida de los beneficios que derivan de la ejecución de la obra o de la prestación del servicio.

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN TERCERA Consejera Ponente: Olga Melida Valle de la Hoz Actor: Hugo Berto Zambrano y otros, contra el Ministerio de Defensa y otros Bogotá D.C., Enero 18 de 2012 Radicación No.: 25000-23-26-000-1996-03149-01(20038)

---

### **Los entes territoriales pueden determinar los presupuestos objetivos de los gravámenes de acuerdo con la ley**

El artículo 338 de señala la competencia que tienen los entes territoriales para que, a través de sus órganos de representación popular, determinen los presupuestos objetivos de los gravámenes de acuerdo con la ley, sin que tal facultad sea exclusiva del Congreso, pues de lo contrario se haría nugatoria la autorización que expresamente les ha conferido a los Departamentos y Municipios en tales aspectos.

No obstante, debe advertirse que la mencionada competencia en materia impositiva de los municipios, para el caso, no es ilimitada, pues no puede excederse al punto de establecer tributos ex novo, pues la facultad creadora esta atribuida al Congreso, pero a partir del establecimiento legal del impuesto, los mencionados entes territoriales, de conformidad con las pautas dadas por, pueden establecer los elementos de la obligación tributaria cuando aquélla no los haya fijado directamente.

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN CUARTA  
Consejera Ponente: Martha Teresa Briceño de Valencia Actor: Empresas Públicas de Medellín e.s.p., contra el Municipio de Mutata Bogotá, D.C., Enero 26 de 2012 Radicación No.: 05001-23-31-000-2009-00498-01(18629)

---

### **La eliminación de los incentivos económicos de las acciones populares no reguló aspectos estructurales del ejercicio de derechos fundamentales**

La Ley 1425 de 2010, al eliminar los incentivos económicos de las acciones populares, no reguló aspectos estructurales del ejercicio de derechos fundamentales o de los mecanismos para su protección. Como se ha visto, tampoco restringió el ejercicio de las acciones populares para la defensa de derechos e intereses colectivos. Corte Constitucional

Magistrado Ponente: Jorge Iván Palacio Palacio Demanda de inconstitucionalidad contra la Ley 1425 de 2010, "Por medio de la cual se derogan artículos de la ley 472 de 1998 – Acciones Populares y



### **La sostenibilidad fiscal no puede invocarse para menoscabar los derechos fundamenta**

La sostenibilidad fiscal, en tanto límite máximo para la garantía de los derechos fundamentales, parecería vaciar de contenido la cláusula de Estado Social y Democrático de Derecho, al despojarla de lo social y de lo democrático, pues la garantía de los derechos fundamentales es limitada, ya que sólo cubre hasta donde los recursos disponibles lo permitan.

Además, esta institución, así entendida, podría llevar a hacer nugatorio el derecho fundamental de acceder a la justicia, pues si bien las personas pueden acudir ante los jueces, lo que ellos decidan puede incumplirse en la realidad, si se excede dichos límites máximos. Sin embargo, el parágrafo del artículo 1º del Acto Legislativo 03 de 2011, impide esta segunda tendencia o intención, ya que garantiza que al interpretar el principio de sostenibilidad fiscal, "bajo ninguna circunstancia, autoridad alguna de naturaleza administrativa, legislativa o judicial, podrá invocar la sostenibilidad fiscal para menoscabar los derechos fundamentales, restringir su alcance o negar su protección efectiva".

Procuraduría General Noviembre 09 de 2011 Concepto Jurídico No. 5244

---

### **Las empresas prestadoras de los servicios públicos domiciliarios se encuentran excluidas de determinar la renta presuntiva**

Las empresas prestadoras de los servicios públicos domiciliarios, entendidas éstas bajo los lineamientos de la ley 142 de 1994, se encuentran excluidas de determinar la renta presuntiva; pero como se analizó en el punto anterior, si las empresas no tienen como objeto el desarrollo de los servicios públicos domiciliarios en los términos señalados en la ley, no pueden quedar inmersas dentro de los tratamientos exceptivos consagrados en la ley fiscal, toda vez que estos

se conceden de manera restringida, previo el cumplimiento de la totalidad de los requisitos exigidos en la norma que los crea”.

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS  
Diciembre 19 de 2011 Concepto Jurídico No. 721

---

### **Las regalías provenientes de la exploración y explotación de recursos naturales no están gravadas con el ICA**

Las regalías que se perciben por la exploración y explotación de recursos naturales son rentas pasivas que tienen origen en la cesión de la licencia de explotación y exploración de minas y canteras y, por ende, no están gravadas con el impuesto de industria y comercio.

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN CUARTA  
Consejero Ponente: Hugo Fernando Bastidas Barcenas Actor: Fundación San Antonio, contra la Secretaria de Hacienda – Dirección Distrital Bogotá, D.C., Septiembre 01 de 2011 Radicación No.: 25000-23-27-000-2006-01363-01(17364)

---

### **La responsabilidad del médico en realización de un tratamiento se extiende hasta el momento en que el paciente es dado de alta con carácter definitivo**

La asunción voluntaria de la protección del paciente en calidad de garante, no termina para el médico con la realización del tratamiento sino que se extiende al momento en que sea dado de alta con carácter definitivo -que vas más allá por supuesto, de la sola salida de la clínica o centro de atención- o la persona sometida a tratamiento, lo abandone voluntariamente.

SALA DE CASACIÓN PENAL Magistrado Ponente: Augusto J. Ibañez Guzmán Actora: Manuel de Jesús Caicedo Bogotá D.C., Abril 11 de 2012 Proceso No. 33920

---

14 - 04 - 2012

## **La regla de vinculación a la ratio decidendi respeto del precedente jurisprudencial no es absoluta**

La importancia de la regla de vinculación a la ratio decidendi y el respeto por el precedente, la Jurisprudencia Constitucional ha señalado que no puede ser entendida de manera absoluta, pues no se trata de petrificar la interpretación judicial ni de convertir el criterio de autoridad en el único posible para resolver un asunto concreto; simplemente, se trata de armonizar y salvaguardar los principios constitucionales que subyacen a la defensa del precedente.

Así las cosas, si el juez en su sentencia, justifica de manera suficiente y razonable el cambio de criterio respecto de la línea jurisprudencial que ha seguido en casos sustancialmente idénticos, quedan salvadas las exigencias de la igualdad y de la independencia judicial; por tanto no podrá reprocharse a la sentencia arbitrariedad ni inadvertencia y el Juez no habrá efectuado entre los justiciables ningún género de discriminación.

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN SEGUNDA  
Consejero Ponente: Víctor Hernando Alvarado Ardila Actor: Efraín Castañeda Hernández, contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca Bogotá, D.C., Febrero 02 de 2012 Radicación No.: 11001-03-15-000-2011-01498-00(AC)

---

## **Texto que firmará Presidente de la República de ley que concede cinco días de licencia por luto a empleados públicos**

Según el texto de la nueva ley, la justificación de la ausencia del empleado deberá presentarse ante la jefatura de personal correspondiente dentro de los 30 días siguientes a la ocurrencia del hecho, para lo cual se adjuntarán: Copia del certificado de defunción expedido. En caso de parentesco por consanguinidad, además, copia del certificado de registro Civil en donde se constate la relación vinculante entre el empleado y el difunto. En caso de relación cónyuge, además, copia del certificado de matrimonio civil o religioso. En caso de

compañera o compañero permanente, además, dos declaraciones extrajuicio de testigos donde se manifieste la convivencia que tenían según, la normatividad vigente.

En caso de parentesco por afinidad, además, copia del certificado de matrimonio civil o religioso, si se trata de cónyuges, o dos declaraciones extrajuicio que prueben la convivencia, si se trata de compañeros permanentes, y copia del registro civil en la que conste la relación del cónyuge, compañero o compañera permanente con el difunto. Congreso de la República- PL-2010-N075S-2011-N223C- TS (LICENCIA POR LUTO) 2012/03/28

---

### **Entes territoriales son competentes para determinar sanción por no declarar industria y comercio**

Los entes territoriales tienen autonomía administrativa conforme lo consagran los artículos 313, numeral 7 y 315, numeral 7 de la Constitución Política y, en virtud de la normativa constitucional, corresponde a los municipios determinar cuál entidad, de las de su estructura, debe cumplir las funciones relacionadas con la determinación, fiscalización, liquidación y cobro de impuestos locales y, mediante el Manual de funciones, establecer con precisión la competencia de los funcionarios para ejecutarlas.

Confirma. M.P. Martha Teresa Briceño De Valencia. Documento Disponible al Público en Abril de 2012. Temas: Facultades del Jefe de la Unidad de Rentas. Emplazamiento Tributario. Procedencia de la Sanción Administrativa. Agotamiento de la Vía Gubernativa. Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Cuarta

---

### **Se reanudarán los procesos de selección de las convocatorias que habían sido afectadas por el acto legislativo 04 de 2011**

El Presidente de la Comisión Nacional del Servicio Civil –CNSC-, informa a la ciudadanía que esta entidad tuvo conocimiento del Comunicado de Prensa No. 14 de fecha 28 y 29 de marzo de 2012 emitido por la Corte

Constitucional, mediante el cual la mencionada Corporación anunció la decisión contenida en la Sentencia C-249 del 28 de marzo de 2012 en el sentido de declarar la inexecutable del Acto Legislativo 04 de 07 de Julio de 2011, en consecuencia, se reanudarán los procesos de selección de las Convocatorias que habían sido afectadas por la norma declarada inexecutable. COMISIÓN NACIONAL DE SERVICIO CIVIL Abril 10 de 2012

---

### **Estafan comprador de un bien inmueble, entregándole una escritura pública ficticia**

El estafador presentó dicho documento para su registro ante la oficina de Registro de Instrumentos Públicos, y se le dio el trámite pertinente.

Al ente de Registro Público, le corresponde llevar el control de la tradición de los bienes inmuebles, para lo cual recibe los instrumentos que le sean puestos a su conocimiento para tal fin y procede a asentar el registro. Por lo tanto tratar de endilgarle responsabilidad a éste por no haber actuado como investigador penal o perito se cae por su propio peso.

Confirma. M.P. Hernán Andrade Rincón. Documento disponible al público en Marzo de 2012. Temas: Daño Emergente. Lucro Cesante. Acción de Reparación Directa. Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Tercera Expediente 25000 232 60 00 1996 03282 de 2012

---

### **Empresas sociales del estado en materia contractual se regirán por el derecho privado**

Estas empresas se rigen por el derecho privado, pero podrán discrecionalmente utilizar las cláusulas exorbitantes previstas en el estatuto general de contratación de la administración pública.

---

## **Es función de la contraloría advertir sobre operaciones para prever graves riesgos que comprometan el patrimonio público**

Se advierte a entidades del sector público en etapa de estructuración del presupuesto con vigencia 2013 para que ajusten los gastos de funcionamiento a la medida real y adecuada de sus necesidades en su cumplimiento misional y hagan los trámites tendientes a la creación de las plantas de personal para las funciones de carácter permanente. Concepto 18253 de 2012

---

## **Mintic facilitaría implementación de mecanismos de rendición de cuentas por medios electrónicos a entidades públicas**

Así quedó contemplado en el articulado acogido por la plenaria de la Cámara del proyecto sobre promoción y protección del derecho a la participación ciudadana. Según el texto aprobado en segundo debate, "las entidades territoriales y las corporaciones públicas deberán contar con una página Web que contendrá de manera permanente y con un diseño claro que facilite su consulta, los informes de la rendición pública de cuentas y toda la información relacionada con el ejercicio de las funciones del alcalde o del gobernador".

Congreso de la Republica- PL-2011-N134C- TD2 (PARTICIPACION CIUDADANA) 2012/03/28

---

12 – 04 2012

## **Así quedó aprobado en penúltimo debate proyecto para expedir la nueva ley general de bomberos**

"Es obligación de los distritos, con asiento en su respectiva jurisdicción y municipios la prestación del servicio público esencial a través de los Cuerpos de Bomberos Oficiales o mediante la celebración de contratos para tal fin con los Cuerpos de Bomberos Voluntarios.

En cumplimiento del principio de subsidiariedad, los municipios de menos de 20.000 habitantes contarán con el apoyo técnico del Departamento y la financiación del Fondo Departamental y/o Nacional de Bomberos para asegurar la prestación de este servicio. Las autoridades civiles, Militares y de Policía, garantizarán el libre desplazamiento de los miembros de los Cuerpos de Bomberos en todo el territorio nacional y prestarán el apoyo necesario para el cabal cumplimiento de sus funciones”.

Fragmento del texto aprobado por la comisión Primera del Senado, el pasado 27 de marzo. Congreso de la Republica-PL-2011-N203C-2011-N181S- TD3 (BOMBEROS) 2012/03/27

---

### **Un empleo está vacante definitivamente para efecto de su provisión por renuncia regularmente aceptada**

Al día siguiente de aceptada puede hacer posesión del cargo el nuevo empleado. Presentada la renuncia, su aceptación por la autoridad competente se producirá por escrito y en P providencia correspondiente deberá determinarse la fecha en que se hará efectiva, que no podrá ser posterior a treinta (30) días de su presentación. Vencido el término señalado sin que se haya decidido sobre la renuncia, el funcionario dimitente podrá separarse del cargo sin incurrir en abandono del empleo, o continuar en el desempeño del mismo, caso en el cual la renuncia no producirá efecto alguno.

Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. Concepto 7258 de 2012

---

### **Una larga vida laboral dedicada a la buena y eficiente prestación del servicio público respaldan también el derecho a la estabilidad**

El acto por el cual se declaró insubsistente el nombramiento del actor, desborda cualquier límite de razonabilidad y proporcionalidad en el ejercicio de la supuesta facultad discrecional, pues, no resulta aceptable que un servidor con una hoja de vida que registra una experiencia de 14 años, con preparación académica comprobada, catalogaban como un

funcionario altamente calificado, sea removido. La honradez, la lealtad y la eficiencia, son condiciones propias del buen empleado que le deben significar un cierto grado de estabilidad.

Confirmase M.P. Alfonso Vargas Rincón Documento Disponible al Público en Marzo de 2012. Temas: Reintegro. Insubsistencia. Empleados de Carrera. Libre nombramiento y Remoción. Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Segunda

---

### **Por no tomar posesión del cargo pierde su investidura concejal de Bogotá, Carlos Arturo Romero Jiménez**

No puede excusarse en su propia culpa y su propia torpeza. La sola manifestación efectuada por el Burgomaestre en su discurso de posesión, en el sentido de anunciar su determinación de designar a la esposa del demandado como miembro de su Gabinete, no le impedía al demandado tomar posesión del cargo de Concejal, por tratarse precisamente de la mera noticia de un hecho futuro, que si bien estaba revestida de un alto grado de probabilidad de concretarse por haber sido emitida por el propio nominador, su acaecimiento dependía básicamente de la expedición y notificación del respectivo acto administrativo de nombramiento y de la posterior aceptación y posesión en el cargo por parte de la persona designada Revocada.

M.P. Documento Disponible al Público en Marzo de 2012 Temas: Principio de confianza legítima. Código de Régimen Político Municipal. Nombramiento. Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Primera Expediente 2011 00213 de 2012

---

### **Documentos de carácter privado provenientes de terceros deberán ser allegados en original o copia autenticada**

Mientras los documentos públicos deben presumirse auténticos (a menos de que sean tachados de falsos), los documentos de carácter privado provenientes de terceros, deberán ser allegados en original o



copia autentica, en la medida que, un principio elemental que siempre ha regido en los ordenamientos procesales es el de que las copias, para que tengan valor probatorio, tienen que ser auténticas.

Ese es el principio consagrado en las normas del Código de Procedimiento Civil que regulan lo relativo a la aportación de copias de documentos.

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA  
Consejero Ponente: Marco Antonio Velila Moreno (E) Actor: Carlos Mario Lopera Pérez, contra Miguel Angel Avendaño Álvarez Bogotá, D.C.,  
Febrero 02 de 2012 Radicación No.: 05001-23-31-000-2011-00566-00  
(PI)

---

### **Integrado consejo asesor de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado - Blindaje jurídico a la Nación**

Un presupuesto de US\$10 millones fue aprobado recientemente, a través del Conpes 3722, para defender al Estado de las demandas en su contra.

Si hay un tema en el que el Estado ha demostrado una clara falencia es en su defensa jurídica, desatención que tiene en jaque las finanzas de la Nación. El panorama es preocupante: en la actualidad hay más de 225 mil procesos en su contra y las pretensiones de estas demandas ascienden a US\$1.000 billones.

Por este motivo se creó la Unidad de Defensa Jurídica del Estado, cuyo fin es frenar el desangre que están sufriendo las finanzas públicas por cuenta de las demandas en su contra. Un proceso que la administración Santos se ha tomado muy en serio, al punto de que a través del Conpes 3722 se emitió el concepto favorable para invertir US\$10 millones con el fin de financiar el fortalecimiento de dicho proceso de defensa.

La responsabilidad sobre este 'chicharrón' la tiene el exconstituyente Fernando Carrillo, quien ya empezó a tomar medidas para blindar a la Nación en los tribunales frente al creciente número de litigios en su contra. Ayer nombró al equipo de juristas que componen el consejo

asesor de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, con quienes construirá la hoja de ruta para esta tarea.

El consejo está compuesto por Liliana Caballero, abogada especializada en derecho penal y criminología; Carlos Esteban Jaramillo, expresidente de la Corte Suprema de Justicia; Hernán Fabio López, especialista en derecho penal; Eurípides Cuevas, constitucionalista y miembro de la Academia Colombiana de Jurisprudencia, y Jorge Pinzón Sánchez, exsuperintendente de Sociedades y bancario.

Para el ministro de Justicia, Juan Carlos Esguerra, “es bien sabido que no se trata simplemente de ser demandado y tener actitud pasiva en defensa de los intereses del Estado; debemos actuar incluso como demandantes”. Para eso, asegura, el nombramiento de la comisión asesora es el mejor ‘levante’ que se pudo realizar para defender a la Nación.

Con la aprobación del millonario presupuesto para fortalecer la defensa judicial del Estado, parece que la rueda empezó a girar. Ahora la idea es tratar de frenar a lo que, se ha descubierto, son verdaderas ‘mafias de abogados’, dedicadas a demandar al Estado, y sobre las cuales el Gobierno ya tiene puesta la lupa.

Fernando Carrillo reveló que el objetivo es “tratar de romper la tradición donde los abogados se aprovechan de la debilidad del Estado porque no encuentran contraparte”. En este sentido, reconoció que “hay una serie de abogados que se dedican a recoger poderes y se quedan con un porcentaje muy alto de las pretensiones de pensionados y asalariados”, lo cual es una conducta “totalmente condenable”: “No se están defendiendo el interés del ciudadano sino sus bolsillos. Cuando un abogado sin escrúpulos piense que puede demandar al Estado porque con seguridad va a ganar el proceso, lo tendrá que pensar dos veces, porque se va a encontrar con una pared inmensa”, enfatizó.

Carrillo aceptó también que la situación actual es complicada: “Son más de 225 mil procesos contra todas las entidades del orden nacional. No los podemos asumir de inmediato, lo vamos a hacer de forma paulatina, y el propósito es tomar los casos que por su importancia, por su cuantía y por su nivel de complejidad ameritan la presencia de la Agencia de

Defensa del Estado". Por eso, insistió, la idea es ser "muy eficientes" y sacar adelante el desafío de desarrollar la capacidad institucional para tener una defensa sólida y coordinada.

---

## **El 12 de abril empezó a regir la Ley 1480 de 2012, Nuevo Estatuto del Consumidor**

La Ley 1480 por la cual se expide el Estatuto del Consumidor, entró a regir dentro el 12 de abril de 2012. Dentro de los principios generales, esta ley que beneficia a todos los colombianos, decreta:

1. La protección de los consumidores frente a los riesgos para su salud y seguridad
2. El acceso de los consumidores a una información adecuada, de acuerdo con los términos de esta ley, que les permita hacer elecciones bien fundadas.
3. La educación del consumidor
4. La libertad de constituir organizaciones de consumidores y la oportunidad para esas organizaciones de hacer oír sus opiniones en los procesos de adopción de decisiones que las afecten.
5. La protección especial a los niños, niñas y adolescentes, en su calidad de consumidores, de acuerdo a lo establecido con el código de infancia y adolescencia.

No más cláusulas abusivas en los contratos y letras diminutas que confunden y engañan a los compradores. Términos como el de 'aplican condiciones y restricciones' deberán ser explicados de forma expresa.

Estas y otras novedades trae La Ley 1480 sancionada el 12 de octubre de 2011 por el presidente Juan Manuel Santos.

1. Derechos del consumidor. El reconocimiento de los derechos de los consumidores como derechos de interés general y por tanto la clasificación de las normas de consumo como leyes de orden público. Esto significa que los derechos de los consumidores y los deberes de los comerciantes no pueden ser desconocidos o modificados, ni siquiera por acuerdo entre las partes, ni mucho menos por aplicación de costumbres mercantiles o normas de otros códigos como el de comercio o civil. ( artículo 4 de la ley).

2. Definición de quién es consumidor. Según la nueva Ley es consumidor toda persona natural o jurídica que adquiera, utilice o disfrute de un bien o servicio como destinatario final, para satisfacción de necesidades de índole personal, familiar o empresarial por fuera del núcleo básico de su actividad económica. Ya no será necesario que exista un vínculo contractual lo que es beneficioso pues ya no podrá exigirse que quien reclame sea la misma persona que celebró el negocio, ahora puede reclamar quien use o disfrute el bien así no sea quien haya contratado.

3. Reclamación de garantías. Se otorgaron facultades jurisdiccionales a la Superintendencia de Industria y Comercio para conocer las acciones por reclamación de garantía, las acciones contractuales y las que tengan que ver con los demás derechos consagrados. También se incrementó el monto de las multas a quienes no cumplan con las normas. Estas pueden ser hasta de 1.000 salarios mínimos para personas jurídicas y 300 salarios mínimos para personas naturales.

4. Reglamenta el derecho a la información. Basados en el anterior principio productores y distribuidores responderán por cualquier daño que sufran los consumidores como consecuencia de una deficiente información. Establece la Ley que el consumidor tiene derecho a recibir información oportuna, veraz, completa, verificable, suficiente para poder tomar decisiones adecuadas. De igual forma dispone que la publicidad obliga a los comerciantes a cumplir con las condiciones objetivas que ofrezcan respecto de sus bienes y servicios.

5. Perfecciona el régimen de garantías legales. El consumidor podrá hacer efectiva la reclamación de garantía ante productores o

distribuidores, quienes deberán responder durante el término de cobertura sin excusarse en que quien debe responder es el fabricante. Además la garantía cubre la reparación, el suministro de repuestos y transporte gratuito del bien. De otro lado extiende la cobertura de la garantía a productos que se encuentren en promoción, oferta o rebaja.

6. Responsabilidad en servicios que suponen la entrega de un bien. Regula el régimen de responsabilidad para servicios que impliquen la entrega de un bien tales como parqueaderos, lavanderías, talleres de reparación, entre otros. Estos deberán responder por el cuidado, conservación y custodia de dichos bienes y sus accesorios y no podrán excluir esta responsabilidad mediante avisos o cláusulas de exoneración. Las comunes advertencias en parqueaderos en las que se anuncia que no se hacen responsables por daños o robo ya no serán válidas.

7. Régimen de protección contractual. Crea un régimen especial de protección contractual en el que se ordena que la interpretación en los contratos de condiciones uniformes debe ser siempre la más favorable al consumidor, prohíbe las cláusulas abusivas o excesivamente onerosas (que benefician en exceso a una de las partes en detrimento de la otra), como aquellas que obliguen a adquirir productos no deseados y reglamenta las cláusulas de permanencia mínima.

8. Ventas a distancia o por medios no tradicionales. Crea un sistema de protección al consumidor en los negocios celebrados a distancia o medios no tradicionales como catálogos, revistas o sitios web y establece un plazo máximo de 30 días para la entrega. Además crea el derecho de retractación, el cual le permite al consumidor dentro de los 5 días siguientes a haber recibido el producto devolverlo al distribuidor y solicitar la devolución del dinero, sin necesidad de alegar causal alguna y siempre y cuando no lo haya consumido.

9 Reversión del pago. Crea el derecho a solicitar la reversión del pago cuando la transacción se hace usando sistemas de compra electrónicos y el consumidor recibe un producto no solicitado. También puede solicitar reversión del pago cuando es víctima de fraude como en el caso de clonación de tarjetas, en el cual el consumidor podrá en los 5 días

siguientes a la transacción solicitar a la entidad financiera que reverse el pago y esta deberá hacerlo inmediatamente.

10. Establece un sistema de responsabilidad solidaria y objetiva. La Ley 1480 deja en claro que existe una responsabilidad solidaria y objetiva entre productores y distribuidores frente a los consumidores por los daños físicos o materiales sufridos como consecuencia de productos defectuosos ya sea en su fabricación, funcionamiento, diseño, empaquetamiento o etiquetamiento.

---

11 - 04 - 2012

### **Inhabilidad por delitos contra el patrimonio público debe ser permanente: Procuraduría 11 de Abril 8:36 AM**

La Procuraduría General de la Nación le solicitó a la Corte Constitucional condicionar la exequibilidad del artículo 1º de la Ley 1474 del 2011, que establece una inhabilidad de 20 años para las personas naturales responsables de delitos de corrupción.

En opinión del Ministerio Público, este límite no se debería aplicar cuando se comentan delitos que afecten el patrimonio del Estado, de lesa humanidad y narcotráfico o relacionados con la pertenencia, promoción o financiación de grupos armados ilegales.

La entidad recordó que, según la Sentencia C-038 de 1996, la ley no puede establecer inhabilidades menos severas que las previstas en la Constitución.

Como el artículo 122 de la Carta Política, modificado por el Acto Legislativo 01 del 2009, establece que la inhabilidad para los delitos mencionados es permanente, la norma cuestionada no podría fijar un límite de 20 años.

Por la misma razón, la Procuraduría pidió que en estos casos no se aplique la excepción relativa a los delitos culposos. (Procuraduría General de la Nación, Concepto 5341 (D-8942), mar. 26/12)

---

## **Despenalizarían la siembra y cultivos de la mata de coca y marihuana pretendiendo acabar con un foco importante de corrupción**

La legalización conducirá a que la sociedad aprenda a convivir con las drogas, tal y como lo ha hecho con otras sustancias como el alcohol y el tabaco.

El proceso de aprendizaje social es sumamente valioso para poder disminuir e internalizar los efectos negativos que se derivan del consumo y abuso de ciertas sustancias.

Sin embargo, políticas como las de la prohibición, al convertir a los consumidores en criminales, desincentivan la aparición de comportamientos y actitudes sociales necesarios para poder lidiar con los problemas de la adicción y el consumo temprano de dichas sustancias.

Congreso de la República Proyecto de Ley 203 de 2012

---

## **Proyecto de desarrollo socioeconómico busca que Bogotá sea productiva las 24 horas**

Con la presente iniciativa se pretende crear e implementar una estrategia de productividad de la ciudad con el objeto de hacer de Bogotá una metrópoli más productiva, competitiva y de mayor oferta laboral que permita ofrecer mayores oportunidades laborales a miles de personas que reclaman ser ocupadas en distintos frentes de trabajo y así reducir los índices de desempleo que registra la capital.

En tal sentido el presente Proyecto de Acuerdo propone instituir unas directrices claras para definir una política pública social para garantizar el derecho al trabajo en condiciones dignas mediante la generación de

una jornada nocturna para alcanzar la productividad en la ciudad durante las 24 horas.

Concejo de Bogotá Proyecto de Acuerdo 106 de 2012

---

### **¿TLC con EE UU revive la 'Ley Lleras'? 11 de Abril 10:46 AM**

El Congreso de la República aprobó ayer el proyecto que implementa el tratado de libre comercio (TLC) con EE UU en materia de propiedad intelectual y que regula la responsabilidad penal por infracciones a los derechos de autor.

La iniciativa sería sancionada por el presidente Juan Manuel Santos durante la Cumbre de las Américas, que inicia el próximo 14 de abril, aprovechando la visita del presidente de EE UU, Barack Obama.

¿Se revivió la "Ley Lleras"?

Un aspecto polémico de esta propuesta es la reforma penal contra la piratería. En ese sentido, se ha comparado con el proyecto de "Ley Lleras", que pretendía penalizar conductas relacionadas con la violación de los derechos de autor en internet y retirar dicho material de la red.

El proyecto aprobado castiga con prisión de cuatro a ocho años a quienes reproduzcan, transporten, almacenen, conserven o exporten obras sin la autorización previa del titular de los derechos.

Pero no solo se dirige a quienes distribuyan o transmitan copias sin autorización, algo que ya está en la ley penal, también serían objeto de este castigo quienes pongan a disposición del público los contenidos, sabiendo que se han violado derechos de autor.

Para el ministro de Comercio Exterior, Sergio Díaz-Granados, el proyecto no tiene ningún componente de la denominada "Ley Lleras". El funcionario afirmó en varios medios de comunicación que "ayer no se



aprobó ni la 'Ley Lleras' recargada, ni la Ley Sopa, ni la Ley Pipa. No revivimos la 'Ley Lleras' por la puerta de atrás".

Según Díaz-Granados, "muchas de las normas que se ratificaron ya existían en la legislación colombiana desde hace cinco años". Por su parte, el ministro del interior, Germán Vargas, respaldó las declaraciones de su colega, afirmando que las normas del proyecto en materia de derechos de autor ya existen, pues "algunas hacen parte de la legislación existente en Colombia dentro de la CAN, de manera que no hay nada nuevo".

Vargas agregó que las sanciones previstas en esta iniciativa relacionadas con el almacenamiento y la reproducción de material sin autorización del autor no cobijan a estudiantes que lo utilicen con fines académicos.

Se reduce la franja nacional de televisión los fines de semana

La norma aprobada anoche también modificó el porcentaje mínimo de producción nacional de televisión que se transmite los fines de semana, que pasó del 50 % al 30 % en horario triple A.

Otros aspectos aprobados en la futura ley tienen que ver con la ampliación de 30 a 70 años en la protección de derechos de autor para obras creadas por personas jurídicas.

Además, se eliminó el trámite de la licencia de reproducción ante la Dirección Nacional de Derecho de Autor.

---

### **Por no tomar posesión del cargo pierde su investidura concejal de Bogotá, Carlos Arturo Romero Jiménez**

No puede excusarse en su propia culpa y su propia torpeza. La sola manifestación efectuada por el Burgomaestre en su discurso de posesión, en el sentido de anunciar su determinación de designar a la esposa del demandado como miembro de su Gabinete, no le impedía al

demandado tomar posesión del cargo de Concejal, por tratarse precisamente de la mera noticia de un hecho futuro, que si bien estaba revestida de un alto grado de probabilidad de concretarse por haber sido emitida por el propio nominador, su acaecimiento dependía básicamente de la expedición y notificación del respectivo acto administrativo de nombramiento y de la posterior aceptación y posesión en el cargo por parte de la persona designada.

Revocada. M.P. Documento Disponible al Público en Marzo de 2012  
Temas: Principio de confianza legítima. Código de Régimen Político Municipal. Nombramiento. Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Primera Expediente 2011 00213 de 2012

---

10 - 04 - 2012

**Niegan suspensión de normas de Cali sobre facultades al Alcalde, a través de las cuales se creó la filial Telecali** Consejo de Estado-Auto-2011-N

La Corporación negó la suspensión provisional de los efectos jurídicos de los Acuerdos N.0275 de 2009 y 0284 de 2009, expedidos por el Concejo Municipal de Santiago de Cali y del Decreto 411.0.20.0618 del 29 de octubre de 2009, proferido por el Alcalde Municipal. A través del decreto mencionado se otorgan unas autorizaciones para efectos de la constitución de la filial de Empresas Municipales de Cali –Emcali-.

A juicio de la Sala, de la simple comparación de los actos acusados con las normas invocadas por el demandante como vulneradas, “no puede concluirse que existe una manifiesta contradicción que amerite decretar la suspensión provisional, puesto que para efectos de determinar la legalidad del acto, resulta indispensable esclarecer la normativa aplicable al caso en concreto, en aras de verificar si el acto se expidió con fundamento o por fuera de las funciones que le competen al Concejo Municipal de Santiago de Cali y el Alcalde Municipal de tal ente territorial, lo cual no es procedente en esta etapa procesal, pues es necesario realizar un análisis normativo y probatorio de fondo, puesto que de la simple comparación de los actos confrontados no puede concluirse que exista una manifiesta y ostensible infracción normativa”.

---

**No motivar la desvinculación de provisionales tiene fundamento constitucional: Consejo de Estado - 10 de Abril 8:22 AM**

La tesis de la Sección Segunda del Consejo de Estado según la cual el acto de retiro de un empleado en provisionalidad no requiere motivación proviene de un análisis constitucional.

Así lo afirmó esta corporación, en respuesta a la Corte Constitucional, que calificó esta tesis como “legal, mas no constitucional ni iusfundamental”.

La Sección aclaró que no motivar la desvinculación de los provisionales tiene fundamento en el artículo 125 de la Constitución, que señala las causales de retiro de los empleados de carrera. En otras palabras, como los empleados provisionales ingresan al servicio por razones discrecionales, no pueden ampararse en las causales de retiro de dichos servidores.

#### Tesis de la Corte Constitucional

Contrario a lo que sostiene la Sección Segunda, la Corte Constitucional ha reiterado que los actos de desvinculación de los empleados provisionales en cargos de carrera deben motivarse.

Así lo hizo en la Sentencia SU-691 del 2011, al revocar varios fallos del Consejo de Estado en los que se confirmaron actos de insubsistencia de provisionales que no indicaban las razones de la decisión. A juicio de la Corte, mientras no exista una lista de elegibles, los servidores nombrados bajo esta modalidad gozan de una estabilidad intermedia.

#### Excepción

Si bien el Consejo defiende la discrecionalidad para declarar insubsistentes a los empleados provisionales, ha exceptuado de esta regla a quienes fueron nombrados en vigencia de la Ley 909 del 2004.

En estos casos, la desvinculación sí debe motivarse, pues así lo estableció el legislador, explicó la Sección Segunda.

(Consejo de Estado, Sección Segunda, Sentencias 05001233100020050143501 (045111) y 08001233100020040160001 (03662009), oct. 12 y 21/11, C.P. Luis Rafael Vergara Quintero)

---

### **Sanción disciplinaria es ineficaz, si no se notifica** 9 de Abril 11:14 AM

Para que una sanción disciplinaria surta efectos legales y prácticos, como la destitución del cargo público, debe notificarse al servidor afectado, ya sea personalmente o mediante alguna de las formas señaladas en el Código Contencioso Administrativo.

Si este requisito no se cumple, la sanción se considera ineficaz, advirtió la Sección Segunda del Consejo de Estado, al anular parcialmente una sanción disciplinaria impuesta a un policía, por falta de notificación.

La corporación recordó que la notificación de las sanciones es una manifestación fundamental del debido proceso. Por lo tanto, su desconocimiento debe ser corregido judicialmente. (Consejo de Estado, Sección Segunda, Sentencia 25000232500019953805401-2270-05. C. P. Alfonso Vargas Rincón)

---

### **Compradores de tiquetes aéreos solo deberán pagar el precio anunciado** 10 de Abril 10:59 AM

La Aeronáutica Civil (Aerocivil) expidió el nuevo reglamento de información al usuario del sector aeronáutico, que primará sobre el Estatuto del Consumidor (L. 1480/11).

Se trata de la Resolución 1582 del 2012, aplicable a cualquier persona natural o jurídica, nacional o extranjera, que desarrolle actividades de aeronáutica civil o difunda información sobre ese tipo de servicios.

La nueva regulación reitera la obligación de las aerolíneas, las agencias de viajes y los intermediarios de informar el valor total del tiquete, incluidos todos los impuestos y cargos, sin importar el medio utilizado. En consecuencia, los usuarios solo estarán obligados a pagar el precio anunciado.

(Aerocivil, Resolución 1507, mar. 23/12 y Resolución 1582, mar. 29/12)

---

### **Contraloría suspende investigaciones a funcionarios con fuero constitucional** - 10 de Abril 9:29 AM

La Contraloría General de la República suspendió las investigaciones fiscales que adelantaba contra funcionarios con fuero constitucional.

Así lo decidió ayer la contralora general, Sandra Morelli Rico, tras acogerse al fallo en el que una sala de conjueces del Consejo Superior de la Judicatura concluyó que la Contraloría no es competente para adelantar investigaciones fiscales contra magistrados de esa corporación, por tratarse de aforados constitucionales.

Según Morelli, el fallo tendría incidencia sobre procesos fiscales contra ministros, directores de departamentos administrativos, embajadores, gobernadores, el Procurador General de la Nación y el Defensor del Pueblo, que también gozan de fuero.

"Se decreta la suspensión de todas las actuaciones que se vienen adelantando por la Contraloría General de la República y que, de una u otra manera, puedan afectar a servidores públicos que gocen de fuero constitucional", explicó la entidad, en un comunicado.

Contraloría no investigará "carrusel de pensiones"

En manos de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes queda el proceso por el denominado “carrusel de pensiones” que involucra a algunos magistrados del Consejo Superior de la Judicatura.

En febrero, la Contraloría había abierto un proceso de responsabilidad fiscal contra nueve magistrados y 13 exmagistrados, por un presunto detrimento patrimonial de 13.786 millones de pesos, ocasionado por el nombramiento de magistrados auxiliares que estaban próximos a pensionarse.

El pasado 30 de marzo, una sala de conjueces del Consejo Superior decidió que la entidad competente para adelantar esa investigación es la Comisión y no la Contraloría, pues los magistrados gozan de fuero constitucional.

---

### **En materia sucesoral, porción conyugal debe extenderse también a compañeros permanentes y parejas del mismo sexo**

La naturaleza y finalidad de la denominada “porción conyugal” le permiten a la Corte Constitucional aseverar que la extensión de este beneficio a las uniones maritales de hecho y parejas del mismo sexo no desnaturaliza la institución jurídica del matrimonio ni afecta su esencia, pero no admitirla, es mantener una distinción discriminatoria entre una unión y la otra y afirmar que un compañero permanente debe acudir a otras vías a las cuales no están sometidas las parejas unidas por el vínculo del matrimonio, para lograr esa protección, pese a que la finalidad de la “porción conyugal” es la de ser una garantía para la pareja sobreviviente. Sentencia C 283 de 2012.

---

### **El impuesto de industria y comercio se paga en el municipio donde se encuentre ubicada la fábrica o planta industrial**

Para el pago del impuesto de Industria y Comercio sobre las actividades industriales, el gravamen sobre la actividad industrial se pagará en el municipio donde se encuentre ubicada la fábrica o planta industrial, teniendo como base gravable los ingresos provenientes de la comercialización de la producción.

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN CUARTA  
Consejera Ponente: Dra Martha Teresa Briceño de Valencia Actor:  
Friesland Colombia S.A., contra el Municipio de Santiago de Cali (Valle)  
Bogotá D.C, Octubre 27 de 2011 Radicación No.  
760012331000200503995-01 (18220)

---

### **Presentación del plan de mejoramiento, informe mensual de seguimiento y austeridad del gasto**

A partir del presente año las entidades destinatarias de la presente Directiva, deberán presentar el plan de mejoramiento, resultado del proceso auditor, a través del Sistema de Rendición Electrónico de Cuenta e Informe (SIRECI) y los dos informes de avance semestralmente, por las instancias competentes, en las fechas señaladas por la Contraloría General de la República y a través del citado Sistema. PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Abril 3 de 2012 Directiva Presidencial No. 03

---

### **Planeación Nacional establece lineamientos técnicos para estrategias de superación de la pobreza** DNP-Resolucion-2012-N0000526 2012/03/29 Diario Oficial-N048388

“Las estrategias para la superación de la pobreza extrema que las entidades territoriales decidan incluir dentro de sus planes de desarrollo deberán contener al menos: a) La línea de base de la situación de las familias y personas en pobreza extrema con base en la información del Sistema de Información de Unidos - Siunidos. b) El diagnóstico de los factores que dificultan el cumplimiento de los logros. c) Las metas a alcanzar durante el periodo de gobierno. d) Las acciones generales a ejecutar en cada una de las dimensiones y logros. e) La estimación de los recursos que se destinarán”.

“La “Guía para la elaboración de los planes locales de lucha contra la pobreza extrema”, que hace parte de la presente Resolución, fija los lineamientos técnicos que las entidades territoriales deberían tener en cuenta para la elaboración de las estrategias y planes territoriales para la superación de la pobreza extrema”.

---

**Suspenden aparte de decreto de Minambiente que adopta metodología para tasar multas en materia ambiental** Consejo de Estado- Auto-2012-N

La Corporación suspendió provisionalmente los efectos del artículo 11 del Decreto 3678 de 2010 “por el cual se establecen los criterios para la imposición de las sanciones consagradas en el artículo 40 de la Ley 1333 de 2009”.

Explicó que “el párrafo 2 del artículo 40 de la Ley 1333 de 2009 faculta al Gobierno Nacional para definir los criterios para la imposición de las sanciones, pero no para elaborar y adoptar una metodología para tasar multas, pues ello constituye una tarea distinta a la asignada por el artículo descrito”.

Para la Sala, “resulta contradictoria la disposición acusada por confrontación directa con la norma invocada, pues según lo dispone el diccionario de la Real Academia de la Lengua “definir” significa “fijar con claridad, exactitud y precisión la significación de una palabra o la naturaleza de una persona o cosa”, y lo que pretende la disposición acusada es otra distinta, al ordenar que el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial “elabore” y “adopte” una metodología para tasar multas, lo cual significa, respectivamente, “transformar una cosa u obtener un producto por medio de un trabajo adecuado” y “recibir, haciéndolos propios, pareceres, métodos, doctrinas, ideologías, modas, etc., que han sido creados por otras personas o comunidades”.

---



## **Se establece la metodología para definir las metas mínimas para la gestión, financiamiento y construcción de vivienda para el periodo 2012-2015**

Los municipios y distritos distribuirán las metas mínimas para la gestión, financiamiento y construcción de vivienda en áreas rurales y urbanas, incluyendo hogares afectados por el Fenómeno de la Niña 2010-2011, población desplazada por la violencia y localizada en zonas de alto riesgo, con especial énfasis en la oferta para vivienda de interés social (VIS). MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO Marzo 27 de 2012 Resolución No. 0184

---

## **Será obligatoria la instalación de detectores de metales y de caninos detectores de explosivos en los portales y estaciones de Transmilenio**

Se establecerá la obligatoriedad de instalar en todos los portales y estaciones del sistema transmilenio detectores de metales, con el fin de impedir el ingreso al Sistema de armas de fuego, armas blancas y corto punzantes.

Proyecto de Acuerdo No. 080 de 2012 – Concejo de Bogotá.

---

## **Contraloría considera inconstitucional artículo relacionado con liquidación de contratos estatales establecido en ley antitrámites**

La Contraloría General de la República demandó ante la Corte Constitucional algunas expresiones del artículo 217 del Decreto Ley 019 de 2012, conocido como ley antitrámites, por considerar que la expedición de paz y salvos a los contratistas como producto de acuerdos, transacciones y conciliaciones estaría en contravía de las facultades otorgadas a esta entidad para realizar un efectivo control fiscal.

---

## **La privación injusta de la libertad por parte de agentes estatales se analiza desde el punto de vista de la responsabilidad objetiva**

De acuerdo con los principios tutelares del Estado Social y Democrático de Derecho, entre los cuales la libertad y la justicia ocupan un lugar privilegiado, cuando una persona privada de la libertad sea absuelta, porque el hecho no existió, el sindicado no lo cometió, la conducta no constituía hecho punible o por in dubio pro reo, se habrá de calificar sin ambages como detención injusta.

Es por ello, que se trata de una responsabilidad objetiva, dado que en eventos de esta naturaleza, ambos valores se encuentran en juego y un argumento de tipo utilitarista, en el sentido de afirmar que se trata de una carga que se debe soportar en bien de la mayoría, no tiene justificación alguna.

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN TERCERA  
Consejero Ponente: Mauricio Fajardo Gómez Bogotá, D.C., Enero 27 de 2012  
Actor: Gonzalo Ortiz Guerra y otros, contra el Ministerio de Justicia y otro  
Radicación: 520012331000199708913 - 01 (18.754)

---

9 – 04 – 2012

## **Conpes aprueba Programa de Fortalecimiento de la Defensa Jurídica del Estado**

La Nación enfrenta más de 260.000 procesos judiciales, cuyas pretensiones superan los 1.000 billones de pesos.

Contenido: Con el fin de mejorar la efectividad de la defensa jurídica del Estado y disminuir los pagos por fallos desfavorables, el Gobierno aprobó la ejecución de un programa integral que demandará recursos por 10 millones de dólares hasta el 2016.

La iniciativa, contenida en el Documento Conpes 3722 del 29 de marzo, consta de tres componentes: apoyo a la instalación de la Agencia de Defensa Jurídica de la Nación, mejora de la gestión del ciclo de defensa jurídica y fortalecimiento de la gestión de la información estratégica.

El pasado 1º de noviembre, durante la presentación de la Agencia y sus órganos directivos, el presidente Juan Manuel Santos reveló que la Nación enfrenta más de 260.000 procesos judiciales, cuyas pretensiones superan los 1.000 billones de pesos.

El segundo componente busca dotar a las entidades públicas de nuevas habilidades de prevención del daño antijurídico, para lo cual se pondrán en marcha, entre otras, las siguientes acciones:

- El diseño de nuevas estrategias de defensa jurídica ante órganos judiciales nacionales e internacionales.
- La adopción de criterios e incentivos de utilización de la conciliación.
- La implementación de un nuevo sistema de gestión de casos.
- La aprobación un plan de restructuración de las oficinas jurídicas de las entidades.

El fortalecimiento de la gestión de la información estratégica, tercer componente, tiene como fin identificar las causas de los litigios y formular estrategias para su reducción; diseñar un modelo de gestión de riesgos fiscales y capacitar a los operadores jurídicos de las entidades en temas comunes y especializados, entre otras medidas.

### La problemática

Colombia presenta una alta litigiosidad frente a las acciones, hechos, omisiones, actos y contratos en que está involucrado el Estado.

El gran número de demandas en contra de entidades estatales y sus pretensiones son una parte del problema, sostiene el Consejo Nacional de Política Económica y Social (Conpes).

Actualmente, no existe información confiable que determine con precisión el estado de tales procesos, el número y la calidad de abogados que representan los intereses de la Nación y la valoración de los litigios que están en grave riesgo de pérdida.

#### Otras medidas

Para contrarrestar lo anterior, el Conpes considera indispensable levantar mapas de riesgo que identifiquen las debilidades en la defensa del Estado y ámbitos de conciliación por tipo de procesos.

Además, es necesario identificar las entidades en las que se concentran los mayores casos y los puntos críticos en la gestión de los documentos que se puedan tener como prueba en los procesos.

Para contar con una estrategia de prevención del daño antijurídico, es imperativo tener una abogacía general del Estado compuesta por un personal con las mayores cualidades profesionales y personales y comprobada idoneidad para el ejercicio de la función pública, agrega el Conpes.

El documento incluye cada una de las estrategias, las fechas de ejecución, los recursos que se destinarán y las metas esperadas hasta el 2016.

(DNP, Documento Conpes 3722, mar. 29/12)

---

### **Menor de edad en situación de discapacidad motora tiene derecho al suministro de transporte por parte del municipio**

El acceso material al sistema general de educación es un componente mínimo que debe ser garantizado por el Estado. La madre de la niña no cuenta con los recursos económicos suficientes para acceder al transporte de servicio público, lo que la ha obligado a poner en riesgo su integridad y la de la niña, durante los largos recorridos que realiza empujando la silla de ruedas, atravesando avenidas y otras complicadas

vías de acceso, que hacen parte de las condiciones geográficas de la ciudad de Manizales.

Revocar M.P. Luis Ernesto Vargas Silva. Documento Disponible al Público en Marzo de 2012 Temas: Derecho a la Educación. Minusválidos. Transporte Escolar. Corte Constitucional - Sentencia T 734 Expediente T 3121794 de 2011

---

### **Lineamientos técnicos para las estrategias de superación de la pobreza que formulen las entidades territoriales en sus planes de desarrollo**

Las estrategias para la superación de la pobreza extrema que las entidades territoriales decidan incluir dentro de sus presupuestos anuales, deberán contener mínimamente: a) Las metas anuales a alcanzar, b) Las acciones a ejecutar durante la vigencia fiscal. c) La estimación de los recursos anuales. Departamento Nacional de Planeación- Marzo 29 de 2012 - Resolución No. 0526

---

### **Instrucciones para el reconocimiento de las licencias de maternidad y paternidad con cargo al Fosyga**

Los Ministerios de Salud y Protección Social y del Trabajo, el primero de ellos, en ejercicio de las competencias y como responsable de la formulación de la política y proyectos del Sector Administrativo de Salud y Protección Social acorde con lo estatuido por el Decreto Ley 4107 de 2011 y el segundo, como ente encargado de formular y dirigir la política en materia de trabajo y empleo, se permiten impartir las directrices que se señalan a continuación para la aplicación de la Ley 1468 de 2011, en virtud de la cual, se modificaron los artículos 236, 239, 57 y 58 del Código Sustantivo del Trabajo y el reconocimiento económico de las licencias de maternidad y paternidad.

MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL Marzo 28 de 2012  
Circular Externa Conjunta No. 000013

---

## **Corte Constitucional**

### **Gobierno se habría extralimitado en ampliar plazos de revisión tecno-mecánica de vehículos nuevos dentro de ley antitrámites.**

Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 202 del Decreto Ley 019 de 2012. El demandante sostiene que las facultades extraordinarias del Presidente de la República en la expedición de la ley anti trámites cobijaban únicamente la supresión o reforma de regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes "en la Administración Pública".

Por lo tanto, el Presidente no estaba facultado para suprimir o reformar regulaciones y requisitos de seguridad previstos en la ley y aplicados de manera externa a la administración pública como la periodicidad de la revisión tecno-mecánica en vehículos nuevos.

Además, aduce que al ampliar ese término sin medida se despoja a la revisión exigida legalmente de su virtualidad primordial; genera una gran inseguridad, y acarrea un enorme peligro, dando a la revisión técnico mecánica un trato equivalente al de los trámites y requisitos inútiles impuestos por la burocracia.

Demandante: José Gregorio Hernández Galindo. A Comentarios del Público Hasta el 18 de Abril de 2012. Temas: Política Anti-trámites. Salubridad Colectiva. Ambiente Sano. Límite de Facultad Extraordinaria del Ejecutivo. Demanda 8974 de 2012 2012-02-15

---

## **Acto legislativo 04 y la posición de la CNSC**

La Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC) solicitó la inexecutable del Acto Legislativo 04 del 2011, que busca facilitarles el acceso a la carrera administrativa a los empleados provisionales que participan en concursos de mérito.

En carta dirigida a Mauricio González, presidente de la Corte Constitucional, la comisión recordó que la facultad del Legislativo para reformar la Carta es limitada, ya que no puede “derogarla, subvertirla o sustituirla en su integridad”, pues ello le corresponde exclusivamente al constituyente primario.

En su opinión, el hecho de homologar las pruebas de conocimiento, la experiencia de los provisionales y los estudios adicionales exigidos para ejercer el cargo implica una sustitución parcial del derecho a la igualdad y del principio de mérito para el ingreso a la carrera administrativa, previstos en la Constitución de 1991.

Para la comisión, la reforma favorece a un grupo de funcionarios, mediante condiciones de privilegio ajenas a lo dispuesto para los demás ciudadanos, que, por no ostentar la condición de servidores provisionales o encargados, deben participar en los concursos siguiendo las reglas generales.

#### Los antecedentes

En agosto del 2009, la Corte declaró inexecutable el Acto Legislativo 01 del 2008, que ordenaba inscribir en carrera administrativa, de manera extraordinaria y sin necesidad de concurso público, a los funcionarios que al 23 de septiembre del 2004 estaban ocupando cargos vacantes de forma definitiva en calidad de provisionales o encargados y que, a la fecha de su inscripción, continuaran desempeñándolos.

Antes de esta decisión, la Corte Constitucional declaró fundadas las objeciones presidenciales a un proyecto de ley en ese sentido. En ese fallo, el tribunal sentenció que los funcionarios provisionales no tienen un derecho adquirido que los exima de participar en un concurso público de méritos para acceder a cargos de carrera, como deben hacerlo los demás ciudadanos.

Ante esos fallos, el Congreso tramitó el Acto Legislativo 04, que afronta, al menos, tres demandas de inconstitucionalidad.

“Si bien el constituyente derivado puede desarrollar, actualizar o, incluso, readecuar el contenido de la Constitución Política atendiendo diversos criterios de carácter sistemático e histórico, lo cierto es que no puede convertir la Constitución reformada en otra completamente distinta a la proyectada por la voluntad del constituyente primario”, advirtió la CNSC.

(CNSC, Oficio 37009, sep. 20/11)

---

### **Con fallo a favor, Megaobras siguen afianzándose jurídicamente**

“Las Megaobras en Cali se afianzan jurídicamente”, expresó el abogado Javier Mauricio Pachón Arenales, Director Jurídico, quien conoció el pasado 12 de abril el fallo en primera instancia del Juzgado Cuarto Administrativo de Descongestión del Circuito de Cali, que en la sentencia No 79, negó las pretensiones de la demanda interpuesta por una ciudadana, contra este proyecto de ciudad.

En el proceso 2010 – 0396, Acción de Nulidad y Restablecimiento del Derecho, la demandante atacaba los actos jurídicos que dan sustento legal a la contribución, entre ellos la resolución 0169 del 4 de septiembre de 2009, la cual fijó el presupuesto y aprobó la distribución y asignación individual de la contribución por valorización por beneficio general, para la construcción de un plan de obras.

Alegaba en la demanda que para la determinación de la base gravable de la contribución en sus predios, no se tuvo en cuenta el costo total de la obra, los estudios socioeconómicos y el beneficio general que obtendrían dichos inmuebles. Solicitaba, que se le declarara exenta del pago y que se le devolviera el dinero cancelado por este concepto, incluidos los intereses legales, condenando al Municipio de Cali al pago de las costas judiciales.



La Administración Municipal, a través de abogado apoderado, contestó oportunamente la demanda y desvirtuó las pretensiones, demostrando que todas las actuaciones adelantadas por la municipalidad están ajustadas al ordenamiento jurídico colombiano.

El Juzgado Cuarto Administrativo de Descongestión realizó el análisis jurídico y jurisprudencial para finalmente fallar en primera instancia que la demandante no logró desvirtuar la presunción de legalidad de los actos administrativos demandados y por tanto, negó la pretensión de nulidad, puesto que se entiende que los mismos se expidieron conforme a la ley.

El Director Jurídico de la Alcaldía, señaló que esta decisión es de suma importancia por cuanto sirve de precedente sobre la legalidad con que se ha adelantado el proceso. “Al hacer la confrontación directa de las normas no encuentra el Juzgado Cuarto Administrativo de Descongestión la supuesta infracción que alega la demandante. Esta decisión la recibimos con el mayor optimismo frente al debate jurídico que ha suscitado la contribución por valorización”, expresó Pachón Arenales.

Sobrepasar este escollo es de gran trascendencia para las Megaobras porque la Administración Municipal demuestra una vez más a la ciudadanía que se está actuando dentro del contexto legal conforme a lo establece la norma. La decisión judicial es importante y se espera que incida sobre los demás procesos que aún están pendientes.

---

### **Dirección Jurídica de Cali presenta balance de 100 días de gestión**

Entre las primeras acciones emprendidas por el director Jurídico de Cali, Javier Mauricio Pachón Arenales, y el subdirector Técnico, Édgar José Polanco Pereira, figuran organizar su equipo en nueve grupos, a través de una resolución.

Bajo el principio de especialidad, se organizó al personal para asesorar jurídicamente a la Administración Municipal y representar judicialmente

al Municipio, con el fin de garantizar que sus actuaciones se desarrollen dentro de un marco de defensa de sus intereses y de respeto a los derechos de los particulares.

La dependencia atendió con diligencia los procesos judiciales dirigidos específicamente contra el señor alcalde, Rodrigo Guerrero Velasco, para evitar que se materializaran órdenes de desacato por incumplimientos de fallos de Tutela, muchos de ellos heredados de la gestión pasada.

El Comité de Conciliación ha estudiado 200 solicitudes y avanza en la administración del riesgo que exige el Modelo Estándar de Control Interno, MECI, mediante el análisis de las causas generadoras del daño, con el fin de detectar dónde se originan.

La estrategia de defensa y las acciones preventivas buscan evitar demandas contra la municipalidad. En lo que se refiere al estudio de los asuntos de interés jurídico prioritarios para el Municipio, la Dirección Jurídica de Cali está presente en la toma de decisiones en temas sensibles como son las mesas interinstitucionales para la liquidación de Emsirva, con el fin de que el proceso culmine exitosamente.

Con el Centro de Diagnóstico Automotor del Valle, se analiza la efectividad de la ejecución de esta entidad, en lo que respecta al contrato interadministrativo suscrito con el Municipio.

De igual forma frente a Emcali, está atenta a la estructuración de los instrumentos jurídicos requeridos para lograr el retorno de este patrimonio a manos de los caleños.

Atendiendo la instrucción de la Ley 1386 de 2010 que obliga a las entidades territoriales a revisar los objetos contractuales que delegan la gestión del Departamento Administrativo de Hacienda del Municipio, se hace seguimiento al tema de Sicali.

En los 100 días de gestión se formuló una guía didáctica para presentar en debida forma Proyectos de Acuerdo y Actos Administrativos, para unificar conceptos al interior de la Administración. La dependencia participó en los debates programados por el Concejo Municipal y revisó,

ajustó y dio viabilidad jurídica a cuatro proyectos de Acuerdo que fueron presentados en el período de sesiones extraordinarias del Concejo.

En lo que se refiere a la emisión de conceptos jurídicos fueron 12, entre ellos los relacionados con el carácter real del impuesto predial (Art 60 Ley 1430 de 2010) y los efectos de la Ley 1492 de 2011, con respecto a la contribución de los espectáculos públicos y artes escénicas, de importancia jurídica, atendiendo la sensibilidad de su naturaleza.

En la Intranet, se publicaron los modelos de minuta para la realización de contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión.

Mediante una circular se impartieron directrices relacionadas con el reconocimiento de incentivos en las acciones populares que se adelantan en contra del Municipio.

Los abogados apoderados fueron convocados a comités técnico jurídicos, para analizar la estrategia institucional en el manejo de cuentas por cobrar de la empresa Calisalud en liquidación, o la responsabilidad extracontractual de la Administración por accidentes de tránsito.

El reconocimiento a la pensión de jubilación, la sustitución pensional y los intereses moratorios también tuvieron su espacio de estudio.

En la página web, la comunidad ha podido conocer las sentencias falladas a favor de la Alcaldía y las directrices que, de manera permanente, se emiten para todas las áreas jurídicas de las dependencias.

---

## **Boletín Personería de Cali**

### **Personería de Santiago de Cali abre investigaciones contra Secretaría de Tránsito**

La Personería de Santiago de Cali abrió investigación formal contra tres funcionarios de la Secretaría de Tránsito.

El primer caso, y considerado el más grave, es el de un Agente de Tránsito, que presuntamente recibió la suma de \$100.000 por parte de un conductor particular. El funcionario, quien además no se encontraba en su sitio de trabajo, estaría violando con su conducta una norma de tipo penal conocida como cohecho propio.

La Personería compulsó copias de este caso a la Fiscalía General de la Nación con el fin de que se investigue la conducta penal del funcionario. Los otros dos casos que está investigando la Personería de Santiago de Cali involucra a dos funcionarios de la dependencia a quienes se les formuló pliego de cargos por no dar respuesta dentro del término legal a varios derechos de petición.

El Personero de Cali insistió en que se continuará investigando casos como el de corrupción para que este tipo de conductas no se sigan presentando en la Secretaría de Tránsito.

Para tener en cuenta

Según el Código Penal, el delito de cohecho propio debe ser castigado con cuatro a ocho años de prisión, multa de 50 a cien salarios mínimos legales mensuales vigentes e interdicción de derechos y funciones públicas por el mismo término de la pena principal.

---

Realizó: Claudia Salas Martínez. Profesional Universitario - Dirección Jurídica

Este es un producto de comunicación del Procedimiento: Difusión de Información Jurídica, que compila las novedades a través del monitoreo permanente a las altas cortes, entidades y organismos de control. La información publicada no compromete en ningún momento la posición institucional de la Alcaldía de Santiago de Cali y su objetivo es meramente de actualización jurídica, para los abogados y servidores públicos de la entidad.